

**Sesión de la Comisión Permanente
H. LXX Legislatura del Congreso del Estado.
Primer año de Ejercicio Constitucional.
Segundo Periodo de Receso.
Agosto 13 de 2025.**

En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (12:32) doce horas con treinta y dos minutos, del día (13) trece de agosto del año (2025) dos mil veinticinco, reunidos en la Sala Guadalupe Victoria, las y los Diputados que integran la Comisión Permanente de la H. Septuagésima Legislatura, bajo la presidencia de la Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, asistida por las CC. Diputadas Secretarias: Delia Leticia Enriquez Arriaga y Verónica González Olgún; y como vocales los Diputados Alberto Alejandro Mata Valadez y Mayra Rodríguez Ramírez, dio inicio la Sesión de la Comisión Permanente.

Presidenta: Buenos días, compañeras y compañeros Diputados, sesión de la Comisión Permanente de la Honorable Septuagésima Legislatura del Estado en el segundo periodo de receso, el primer año de ejercicio constitucional de agosto 13 de 2025.

1.- Lista de asistencia:

Presidenta: Y le solicito a la Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga pase lista de asistencia de las y los Diputados integrantes de esta Comisión Permanente.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Con el permiso de la Presidenta.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza.

Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Presente.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada Verónica González Olguín.

Diputada Verónica González Olguín: Presente.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: La de la voz, presente.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputado Alberto Alejandro Mata Valadez.

Diputado Alberto Alejandro Mata Valadez: Presente.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada Mayra Rodríguez Ramírez.

Diputada Mayra Rodríguez Ramírez: Presente.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Le informo que tenemos 5 Diputados presentes, por lo cual hay quórum, es cuánto.

Diputado.	Asistencia.
María del Rocío Rebollo Mendoza	Si.
Delia Leticia Enriquez Arriaga	Si.
Verónica González Olguín	Si.
Alberto Alejandro Mata Valadez	Si.

Mayra Rodríguez Ramírez

Si.

Presidenta: Gracias Diputada, habiendo quórum legal y se abre la sesión.
(campana)

2.- Lectura, discusión y votación del acta de la sesión anterior:

Presidenta: Esta presidencia solicita la dispensa de lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 08 de agosto de 2025, se somete a votación de manera económica para su aprobación, para lo cual solicito a las y los Diputados integrantes de esta comisión que se manifiesten levantando su mano.

Presidenta: Quiénes estén por la afirmativa.

Presidenta: En contra.

Presidenta: En abstención.

Presidenta: Le solicito a la Diputada Secretaria Verónica González Olguín, nos dé a conocer el número y sentido de los votos emitidos.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, informo que han quedado registrados 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, es cuánto, Presidenta.

Nombre del Diputado.	Sentido del voto.
María del Rocío Rebollo Mendoza	Favor
Delia Leticia Enriquez Arriaga	Favor
Verónica González Olguín	Favor
Alberto Alejandro Mata Valadez	Favor
Mayra Rodríguez Ramírez	Favor

Presidenta: Gracias Secretaria, se aprueba la solicitud de dispensa de lectura y pregunto a las y los Diputados si existe alguna aclaración o modificación que quieran realizar al acta cuya lectura se ha omitido, no siendo así, procederemos a la votación para la aprobación de dicha acta, para lo cual solicito a las y los Diputados manifiesten el sentido de su voto de manera económica levantando la mano.

Presidenta: Quiénes estén por la afirmativa.

Presidenta: En contra.

Presidenta: En abstención.

Presidenta: Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga, nos da a conocer el número y sentido de los votos.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Con el permiso de la mesa directiva, le informo que tenemos 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, es cuánto.

Nombre del Diputado.	Sentido del voto.
María del Rocío Rebollo Mendoza	Favor
Delia Leticia Enriquez Arriaga	Favor
Verónica González Olguín	Favor
Alberto Alejandro Mata Valadez	Favor
Mayra Rodríguez Ramírez	Favor

Presidenta: Muchas gracias, se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día 08 de agosto de 2025.

3.- Lectura de correspondencia y tramite:

Presidenta: Procedemos, pues, a la lista de lectura de correspondencia, por lo que le pido a la Diputada Secretaria Verónica González Olguín se sirva a realizarla.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Con el permiso de esta mesa directiva, doy cuenta de la correspondencia oficial recibida por esta Legislatura del Estado de Durango, hoy 13 de agosto del 2025.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio No. CELSH/LXVI/SSL-0660- 10/2025.- Enviado por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual remiten “ACUERDO ECONÓMICO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LEGISLAR EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS.”

Presidenta: Túrnese a la Comisión de Asuntos Familiares y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Circular No. CELSH/LXVI/SSL-12-10/2025.- Enviada por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura.

Presidenta: Enterados.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Circular No. HCE/SAP/C-006/2025.- Enviada por el H. Congreso del Estado de Tabasco, comunicando

apertura y clausura de su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, del Segundo Periodo de Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Presidenta: Enterados.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio No. SG/UE/230/821/25.- Enviado por el C. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, dando respuesta a punto de acuerdo de fecha 29 de abril de 2025, en materia de reserva territorial.

Presidenta: Túrnese al Diputado Proponente, así como al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto de su Coordinador.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio No. SG/UE/230/928/25.- Enviado por el C. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, dando respuesta a punto de acuerdo de fecha 13 de mayo de 2025, en materia de apoyo a productores por sequía.

Presidenta: Túrnese a la Diputada Proponente, así como al grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Coordinador.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio No. SA68/2025.- Enviado por el M.D. José Ángel Mascorro Muñoz, dando respuesta a Punto de Acuerdo denominado "Fiscalización" de fecha 15 de Julio de 2025.

Presidenta: Túrnese al Diputado Proponente, así como al grupo parlamentario "Cuarta Transformación", por conducto de su Coordinador.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Iniciativa.- Enviada por el Dr. Homero Martínez Cabrera, Presidente Municipal de Lerdo, Dgo., en la cual solicita autorización para la ampliación de la vigencia del contrato de concesión para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en puentes peatonales.

Presidenta: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio No. IEPC/SE/1632/2025.- Presentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante el cual remite escrito suscrito por el Lic. Héctor Manuel Zaragoza Solís, en su carácter de candidato electo como Juez del Poder Judicial del estado de Durango, en el marco del Proceso Electoral Ordinario del Poder Judicial Local 2024-2025, por el que comunicó a ese Instituto su renuncia y declinación definitiva al cargo antes mencionado.

Presidenta: Túrnese a la Comisión de Justicia, así mismo comuníquese al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio IEPC/SE/1620/2025.- Presentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante el cual informa que dicho Instituto gozará de un periodo vacacional del 1 al 16 de septiembre de 2025, reanudando labores el día 17 de septiembre 2025.

Presidenta: Enterados.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficio No. TPE- 043/2025.-
Presentado por el C. Dr. Esteban Alejandro Villegas Villarreal, Gobernador del
Estado de Durango, mediante el cual propone a la C.P. y M.I. Isolda del Rosario
González Cisneros, para ocupar la titularidad de la Secretaria de Contraloría del
Gobierno.

Presidenta: Túrnese a la Comisión de Administración Pública.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Oficios S/N.- Enviados por los
Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Durango, mediante los cuales presentan su renuncia al cargo.

Presidenta: Túrnense a la Comisión de Justicia.

Diputada Secretaria Verónica González Olguín: Es cuánto.

Presidenta: Gracias Diputada.

4.- Convocatoria a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones:

Presidenta: Y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Durango, se emite la declaratoria de lectura
del acuerdo presentado por la Junta de Gobierno en Coordinación Política de
esta Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango,
mediante el cual, de conformidad con lo que establecen los artículos 76 y 82,
fracción cuarta y quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango, 51, 64, 82, en sus fracciones cuarta y quinta y 84 de la Ley Orgánica

del Congreso del Estado de Durango, se somete a la consideración de esta comisión permanente la celebración de un Primer Periodo Extraordinario de sesiones dentro del segundo periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la septuagésima Legislatura del Estado.

Presidenta: Le pido, en términos del artículo 197, pregunto si habrá presentación de dicho dictamen por algún integrante de la Junta de Gobierno, no siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Verónica González Olgúin, de lectura a los puntos relevantes de dicho acuerdo.

Diputada Secretaria Verónica González Olgúin: Con el permiso de la mesa directiva; Asuntos, Dictamen presentado por la Comisión de Justicia, que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango y sus efectos derivados, Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que contiene autorización para enajenar a título gratuito, el inmueble identificado como terreno urbano, ubicado en carretera Durango – México, municipio de Durango, Dgo., a favor del Club Automovilístico de Durango A.C. Ratificación de la propuesta de designación de la C.P. y M.I. Isolda del Rosario González Cisneros, para ocupar el cargo de Titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango. Proceso Legislativo respecto a la renuncia de Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango y Proceso Legislativo respecto a la designación del integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, por parte del Poder Legislativo, es cuánto Presidenta.

Presidenta: Muchas gracias Diputada Secretaria.

Presidenta: Esos eran los asuntos, para los cuales solicita la Junta de Gobierno el celebrar un periodo extraordinario. En virtud de la presentación de este acuerdo, se abre el registro de donadores a favor, en contra o en abstención de dicho acuerdo, ¿hay algún Diputado o Diputada que desea hacer uso de la voz?

Presidenta: No siendo así, se somete a votación en forma nominal el acuerdo y las señoras y señores Diputados podrán emitir su voto a favor, en contra o en abstención, por lo que se le solicita a la Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga, nombre a cada uno de los Diputados para que manifiesten el sentido de su voto y tomen nota del mismo.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza.

Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: A favor.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada Verónica González Olguín.

Diputada Verónica González Olguín: A favor.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputado Alberto Alejandro Mata Valadez.

Diputado Alberto Alejandro Mata Valadez: A favor.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada Mayra Rodríguez Ramírez.

Diputada Mayra Rodríguez Ramírez: A favor.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enriquez Arriaga: Diputada Delia Leticia Enríquez Arriaga, a favor.

Diputada Secretaria Delia Leticia Enríquez Arriaga: Informo que tenemos 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, es cuánto.

Presidenta: Muchas gracias Diputada Secretaria, se aprueba el acuerdo y, visto el resultado de esta votación, esta comisión permanente convoca a un primer periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo periodo de receso correspondiente al primer año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Septuagésima Legislatura Local, el cual dará inicio el día 14 de agosto de 2025 a las 12:45, en virtud de lo que mandata la ley, que se debe convocar al menos 24 horas antes, con la finalidad de desahogar los siguientes asuntos; Dictamen presentado por la Comisión de Justicia, que contiene la ley orgánica del Poder Judicial del ESO de Durango y sus efectos derivados, Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que contiene autorización para enajenar a título gratuito el inmueble identificado como terreno urbano ubicado en Carretera Durango, México, municipio de Durango, Durango, a favor del Club Automovilístico de Durango AC., Ratificación de la propuesta de designación de la Contadora Pública de Maestra Isolda del Rosario González Cisneros para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, Proceso legislativo respecto a la renuncia de

magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango. Proceso legislativo respecto a la designación del integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango por parte del Poder Legislativo.

Presidenta: Y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos a hacer reconocimiento de las y los Diputados integrantes de esta Legislatura a través de los citatorios correspondientes, y se ordena su expedición como decreto número 184 para los efectos de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango.

5.- Presentación de iniciativas:

Presidenta: Y dando continuidad al orden del día, en virtud del contenido de la iniciativa presentada por las y los integrantes, Diputados e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se adiciona una fracción XXVII y se recorre la subsecuente, correspondiente al artículo 47 de la Ley de Protección Civil del ESO de Durango, en materia de protección civil y medio ambiente.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E S.**

Quienes suscriben, los CC. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXX Legislatura del H. Congreso de Durango, **DIP. ERNESTO ABEL ALANÍS HERRERA, DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODÍGUEZ, DIP. NOEL FERNÁNDEZ MATURINO, DIP. CELIA DANIELA SOTO HERNÁNDEZ, DIP. CARLOS CHAMORRO MONTIEL, DIP. MARÍA DEL ROCÍO REBOLLO MENDOZA y DIP. ANA MARÍA DURÓN PÉREZ;** en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO**, en materia de **PROTECCIÓN CIVIL Y MEDIO AMBIENTE** con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las zonas naturales, serranas y forestales del país representan no solo un valioso patrimonio ambiental, sino también espacios de desarrollo económico y social a través del ecoturismo, la recreación y diversas actividades productivas.

No obstante, estas regiones son particularmente vulnerables a fenómenos naturales como incendios forestales, deslaves, sequías, inundaciones y otros riesgos que no solo son derivados del cambio climático, sino también de accidentes provocados por descuidos del hombre al no atender medidas adecuadas de prevención, o bien, al no saber como actuar frente un riesgo inminente.

En este contexto, la presencia de personas físicas o morales que operan cabañas, centros turísticos, campamentos o cualquier tipo de establecimiento en estos territorios, requiere una corresponsabilidad activa en la prevención, atención y reducción de riesgos, en concordancia con los principios de la Ley de Protección Civil y sus demás herramientas como coordinación.

La autoridad de protección civil, en sus distintos niveles de gobierno, tiene la atribución y responsabilidad de diseñar, implementar y promover acciones para salvaguardar la integridad de las personas y el entorno.

Por ello, se considera necesario establecer de manera clara en la ley la obligación de capacitar a las personas que desarrollen actividades económicas en zonas naturales o forestales, a fin de dotarlas de herramientas prácticas, conocimientos técnicos y conciencia ambiental, que les permitan actuar ante emergencias, prevenir desastres y operar sus negocios de forma segura y responsable con el medio ambiente.

La capacitación deberá incluir, entre otros temas, la prevención y control de incendios forestales, protocolos de evacuación, primeros auxilios en áreas remotas, manejo adecuado de residuos, conservación de recursos naturales y cumplimiento de normativas ambientales y forestales, es decir, todo ello con un enfoque de prevención y manejo de riesgos en un contexto ambiental.

La intención de esta iniciativa de adición no es imponer una carga administrativa excesiva, sino consolidar un modelo de gestión integral del riesgo que involucre a todos los actores que inciden en zonas de alto valor ecológico.

Las personas físicas o morales que operan en estos territorios deben participar activamente en los procesos de capacitación ofrecidos o avalados por las autoridades de protección civil, como parte de una cultura de la prevención que permita no solo proteger vidas humanas, sino también preservar los ecosistemas y la biodiversidad que son fundamentales para el bienestar colectivo.

Establecer este deber en la legislación es un paso necesario para reforzar la corresponsabilidad, garantizar condiciones mínimas de seguridad y avanzar hacia una relación armónica y sustentable entre la actividad humana y el entorno natural.

Derivado de lo anterior impulsamos las adiciones correspondientes a la Ley del Protección Civil del Estado de Durango, mismas que se ilustran en el siguiente cuadro:

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO.	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
<p>ARTÍCULO 47. La Coordinación Estatal tiene las facultades siguientes en materia de protección civil:</p> <p>FRACIÓN DE LA I A LA XXVI...</p> <p>SIN CORRELATIVO</p>	<p>ARTÍCULO 47. La Coordinación Estatal tiene las facultades siguientes en materia de protección civil:</p> <p>FRACIÓN DE LA I A LA XXVI...</p> <p>XXXVII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, capacitaciones dirigidas a personas físicas o morales que, dentro de los términos legales, administren, operen o exploten establecimientos en zonas naturales, boscosas, serranas o de valor ambiental, como cabañas, centros recreativos, campamentos, sitios turísticos o similares. Dichas capacitaciones deberán integrar contenidos orientados a la prevención, preparación y atención de riesgos asociados al entorno natural, como incendios forestales, deslaves, inundaciones y otros fenómenos propios de estas regiones. Asimismo, se deberá incluir de manera específica la capacitación para reaccionar adecuadamente ante riesgos físicos derivados de la realización de actividades recreativas, como senderismo, ciclismo de montaña, tirolesas, paseos acuáticos u otras prácticas comunes en zonas turísticas naturales, procurando incluir un enfoque de cuidado del medio ambiente y los ecosistemas forestales.</p>

La presente iniciativa busca reducir el riesgo de accidentes físicos durante actividades recreativas realizadas en áreas naturales, como senderismo, ciclismo, tirolesas, navegación en cuerpos de agua, entre otras.

Estas actividades, aunque atractivas y generadoras de desarrollo económico, pueden poner en peligro a visitantes, trabajadores y al ecosistema si no existen protocolos adecuados de prevención y respuesta. Por ello, incluir este componente en las capacitaciones refuerza la seguridad integral del espacio y de sus usuarios.

Con esta pretensión no solo se procura la seguridad y la capacidad de reacción de los usuarios en peligro en este tipo de contextos, sino también se procura la manera en que debe actuarse con protocolos que incluyan un enfoque de cuidado a las zonas serranas, boscosas o medio ambientales, lo cual se hace en los siguientes términos:

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXVII y se recorre la subsecuente, correspondiente al artículo 47 de la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 47. La Coordinación Estatal tiene las facultades siguientes en materia de protección civil:

FRACCIÓN DE LA I A LA XXVI...

XXXVII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, capacitaciones dirigidas a personas físicas o morales que, dentro de los términos legales, administren, operen o exploten establecimientos en zonas naturales, boscosas, serranas o de valor ambiental, como cabañas, centros recreativos, campamentos, sitios turísticos o similares. Dichas capacitaciones deberán integrar contenidos orientados a la prevención, preparación y atención de riesgos asociados al entorno natural, como incendios forestales, deslaves, inundaciones y otros fenómenos propios de estas regiones. Asimismo, se deberá incluir de manera específica la capacitación para reaccionar adecuadamente ante riesgos físicos derivados de la realización de actividades recreativas, como senderismo, ciclismo de montaña, tirolesas, paseos acuáticos u otras prácticas comunes en zonas turísticas naturales, procurando incluir un enfoque de cuidado del medio ambiente y los ecosistemas forestales.

XXVIII. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Gobernador o el Consejo Estatal dentro de la esfera de sus facultades.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, a los 12 días del mes de agosto del dos mil veinticinco.

DIP. ERNESTO ABEL ALANÍS HERRERA

**DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES
RODRÍGUEZ**

DIP. NOEL FERNÁNDEZ MATURINO

DIP. CELIA DANIELA SOTO HERNÁNDEZ

DIP. CARLOS CHAMORRO MONTIEL

**DIP. MARÍA DEL ROCÍO REBOLLO
MENDOZA**

DIP. ANA MARÍA DURÓN PÉREZ

Presidenta: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Noel Fernández Maturino, hasta por diez minutos Diputado.

Diputado Noel Fernández Maturino: Con el permiso de la Comisión Permanente, compañeras y compañeros Diputados, personal del Congreso del Estado, amigos todos, muy buenas tardes. Las zonas naturales, serranas y forestales del país representan un valioso patrimonio ambiental, siendo también espacios de desarrollo económico y social a través del ecoturismo, la recreación y diversas actividades productivas que aquí se desarrollan. Estas mismas regiones son vulnerables a fenómenos naturales, como incendios forestales, deslaves,

inundaciones y otros riesgos derivados del cambio climático. Las características que representan este tipo de regiones también son aptas para la práctica de actividades recreativas de mediano riesgo, por lo que debemos estar preparados para la atención oportuna, con las medidas adecuadas de prevención que nos permitan actuar frente a un riesgo inminente. De ahí la pertinencia que las personas administradoras y operadoras de cabañas, centros turísticos, campamentos o cualquier tipo de establecimiento ubicado en estas zonas adquieran una corresponsabilidad activa en la prevención, atención y reducción de riesgos. Lo que hace necesaria la estrecha colaboración con los elementos de protección civil, no sólo para auxiliar, sino para capacitar a los encargados en este tipo de atractivos. De ahí la imperiosa necesidad de legislar en este sentido, a fin de capacitar a las personas que administren zonas naturales o forestales en las que se realicen actividades recreativas. Esto con el objetivo de dotarles de herramientas prácticas, conocimientos técnicos, primeros auxilios y conciencia ambiental que les permita actuar ante emergencias que pongan en riesgo la vida de un ser humano, prevenir desastres y operar sus negocios de forma segura y responsable con el medio ambiente, establecer esta tarea en la Ley de Protección Civil del Estado es un paso necesario para reforzar la corresponsabilidad, garantizar condiciones mínimas de seguridad y avanzar hacia una relación armónica y sustentable entre la actividad humana y nuestro entorno natural. Por tanto, es que la presente iniciativa busque promover que la Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, promuevan acciones de capacitación dirigidas a personas físicas o morales que, dentro de los términos legales, administren, operen o exploten establecimientos en zonas naturales, boscosas, serranas o de valor ambiental, como cabañas, centros recreativos, campamentos, sitios turísticos. Estas actividades, aunque atractivas y

generadoras de desarrollo económico, también ponen en riesgo a peligro a visitantes, trabajadores y al ecosistema, si no existen los protocolos adecuados de prevención y respuesta inmediata. Por ello, incluir este componente en las capacitaciones refuerza la seguridad integral del espacio y de los usuarios. Cabe recordar que Durango es una de las principales reservas forestales a nivel nacional y, desde luego, con una gran vocación ecoturística que nos potencia como una de las principales regiones a nivel país para desarrollar este tipo de actividades. Con esta iniciativa no solamente habremos de procurar la seguridad y la capacidad de reacción de los usuarios en peligro en este tipo de contextos, sino también se habrán de proporcionar los conocimientos necesarios que les permitan actuar, cumpliendo con los protocolos que incluyan un enfoque de cuidado en las zonas serranas, boscosas o medioambientales. Por tal motivo, compañeras, compañeros, exhortarlos a que la presente iniciativa pueda contar con el respaldo de todas y todos ustedes, teniendo como única finalidad la salvaguarda y la integridad ciudadana, así como el cuidado de nuestro medioambiente y seguir potenciando a nuestra entidad como una ciudad segura y también como una de las zonas más aptas para desarrollar este tipo de actividades, es cuánto muchas gracias.

Presidenta: Muchas gracias, Diputado Noel Fernández Maturino y esta iniciativa se turna a la Comisión de Protección Civil.

Presidenta: Y toca el turno de conocer el contenido de la iniciativa presentada por las y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se expiden la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Durango y se

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S .**

Los suscritos Diputadas y Diputados **ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ, VERONICA GONZALEZ OLGUIN, GABRIELA VAZQUEZ CHACON, MAYRA RODRIGUEZ RAMIREZ y FERNANDO ROCHA AMARO**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXX Legislatura del Congreso de Durango, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos **iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se EXPIDEN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE DURANGO** y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO**, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La transparencia y el acceso a la información pública constituyen pilares esenciales de toda democracia moderna. Son mecanismos que permiten a la ciudadanía ejercer un control efectivo sobre el poder público, prevenir la corrupción, exigir rendición de cuentas y participar activamente en la vida pública.

En México, estos derechos han sido reconocidos constitucionalmente y fortalecidos por tratados internacionales, leyes generales y organismos autónomos que garantizan su ejercicio.

Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante retroceso en materia de transparencia a nivel nacional.

Ante este contexto, el Estado de Durango tiene la responsabilidad histórica de reafirmar su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por ello, se propone la creación de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, compuesta por más de 103 artículos, distribuidos en 8 títulos, y artículos transitorios. Esta ley armoniza los estándares internacionales con una visión local centrada en los derechos de los duranguenses, fortaleciendo las instituciones públicas y promoviendo una cultura de apertura y responsabilidad.

La nueva ley propuesta no solo armoniza con instrumentos internacionales, sino que los fortalece desde una perspectiva local, reconociendo las particularidades de Durango y la necesidad de construir instituciones sólidas, confiables y abiertas.

El Partido Acción Nacional ha sido históricamente un defensor de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional. Nuestra visión parte de la convicción de que el poder público debe estar al servicio de la ciudadanía, y que el acceso a la información es una herramienta para empoderar a los ciudadanos, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de la gestión pública.

Desde el PAN, entendemos la transparencia no como una concesión del gobierno, sino como un derecho humano que debe ser garantizado por la ley. Por ello, esta iniciativa:

- Fortalece los mecanismos de acceso a la información, reduciendo tiempos de respuesta, simplificando procedimientos y ampliando las obligaciones de los sujetos obligados.
- Impulsa la transparencia proactiva, obligando a las instituciones a publicar información clave sin necesidad de solicitud.
- Establece sanciones claras y proporcionales para quienes incumplan con sus obligaciones de transparencia.
- Promueve la participación ciudadana, mediante consejos consultivos, mecanismos de evaluación social y plataformas digitales abiertas.

Esta ley es una expresión concreta de los valores que el PAN defiende la legalidad, responsabilidad, apertura y respeto a los derechos fundamentales. Es también una respuesta firme ante el intento de regresión autoritaria que amenaza los avances democráticos del país.

La propuesta de nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango que propone el PAN se compone de:

- Poco más de cien artículos, que desarrollan de manera integral los derechos, obligaciones, procedimientos y sanciones.
- 8 títulos, que agrupan temáticamente los contenidos:
 1. Disposiciones generales
 2. Sujetos obligados
 3. Procedimientos de acceso
 4. Transparencia proactiva
 5. Protección de datos personales
 6. Participación ciudadana

7. Régimen sancionador

La aprobación de esta ley traerá múltiples beneficios para la ciudadanía, como son:

- Mayor acceso a información pública, que permitirá conocer cómo se gastan los recursos, cómo se toman las decisiones y quiénes son responsables de ellas.
- Fortalecimiento de la confianza en las instituciones, al demostrar que el gobierno estatal está comprometido con la legalidad y la apertura.
- Prevención de la corrupción, al dificultar prácticas discrecionales y fomentar el escrutinio público.
- Empoderamiento ciudadano, al facilitar la participación informada en asuntos públicos.
- Protección de derechos, al garantizar que la información pública sea accesible, veraz, oportuna y completa.
- Inclusión digital, mediante plataformas accesibles para todos.

En suma, esta ley no solo mejora la gestión pública, sino que transforma la relación entre el gobierno y la sociedad, haciéndola más horizontal, transparente y democrática.

En un contexto donde la transparencia ha sido atacada y debilitada, nuestro Estado puede demostrar que es posible construir instituciones abiertas, responsables y comprometidas con los derechos ciudadanos.

Esta propuesta de nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango es más que una reforma legal, es una declaración de principios, una apuesta por la democracia y una herramienta para construir un futuro más justo, informado y participativo.

Desde el Partido Acción Nacional, reafirmamos nuestro compromiso con esta causa. Invitamos a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa. Porque la transparencia no es un lujo, es una necesidad y el acceso a la información no es una dádiva, es un derecho.

Por otro lado, también se propone la expedición de la nueva Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango y en el contexto de una sociedad cada vez más digitalizada, la protección de los datos personales se erige como un componente esencial de la dignidad humana, la privacidad y la autodeterminación informativa. Este derecho, consagrado en el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentra respaldo en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que han contribuido a la consolidación de estándares globales en esta materia.

En Durango, la transformación institucional exige una respuesta normativa clara, eficaz y acorde con los principios constitucionales. La desaparición del Instituto de Transparencia como órgano autónomo no debe traducirse en una regresión de derechos, sino en una oportunidad para fortalecer los mecanismos de vigilancia, prevención y sanción desde una lógica de corresponsabilidad institucional.

Por ello, se propone la expedición de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, como un instrumento jurídico autónomo, actualizado y armónico con el nuevo diseño institucional. Esta ley busca garantizar que el tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos obligados, como son las entidades públicas que ejercen funciones de autoridad o administran recursos públicos, se realice conforme a los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, consentimiento, responsabilidad, calidad, seguridad y lealtad.

Dentro de los objetivos Fundamentales se encuentran:

- Una regulación integral del tratamiento de datos personales, asegurando su conformidad con los principios, deberes y bases establecidos en la legislación general y el bloque de constitucionalidad.
- El establecimiento de procedimientos accesibles y eficaces para el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), con garantías mínimas de resolución en plazos razonables.
- La definición clara de las obligaciones de los sujetos obligados, incluyendo la recolección, almacenamiento, uso, transferencia y supresión de datos, así como la implementación de avisos de privacidad y protocolos internos de seguridad.
- La asignación de atribuciones específicas a los órganos internos de control, la Contraloría del Estado y demás autoridades competentes, para vigilar el cumplimiento de la ley, atender solicitudes ciudadanas, resolver medios de impugnación y aplicar sanciones.
- La incorporación de mecanismos de prevención y gestión de riesgos, como evaluaciones de impacto, políticas de seguridad de la información y capacitación continua del personal que maneja bases de datos sensibles.
- La previsión de medidas correctivas y sancionatorias, aplicables tanto a autoridades como a servidores públicos que vulneren las disposiciones legales, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes, y
- La protección reforzada de datos personales sensibles, biométricos y de menores de edad, bajo un enfoque de derechos humanos, interés superior del menor, perspectiva de género e interseccionalidad.

Por ello, esta iniciativa responde a una necesidad urgente de preservar y fortalecer el derecho fundamental a la protección de datos personales en Durango. En un entorno donde las tecnologías digitales avanzan con rapidez y los riesgos de vulneración se multiplican, el Estado

debe garantizar que sus instituciones estén preparadas para actuar con responsabilidad, transparencia y eficacia.

La nueva ley no solo busca llenar el vacío normativo dejado por la reconfiguración institucional, sino consolidar un esquema de gobernanza que proteja la privacidad de las personas, promueva la rendición de cuentas y asegure que el uso de la información personal se realice con respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

Finalmente, con el objetivo de consolidar un marco institucional robusto y funcional en materia de transparencia y protección de datos personales, se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, a fin de adecuar y ampliar las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría en concordancia con el nuevo diseño normativo derivado de la desaparición del órgano garante autónomo.

Esta reforma busca dotar a la Secretaría de la Contraloría de facultades claras, operativas y suficientes para:

- Ejercer funciones de vigilancia, evaluación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales por parte de los sujetos obligados.
- Atender, canalizar y resolver solicitudes ciudadanas, así como los medios de impugnación relacionados con el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), garantizando procesos accesibles, eficaces y con resoluciones en plazos razonables.
- Implementar mecanismos de supervisión y control interno, incluyendo auditorías, revisiones de cumplimiento normativo y evaluaciones de impacto en protección de datos personales, especialmente en el manejo de información sensible, biométrica o de menores de edad.
- Coordinar acciones de capacitación, asesoría técnica y difusión, dirigidas a los servidores públicos de los sujetos obligados, con el fin de fortalecer la cultura institucional de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la privacidad.
- Aplicar medidas correctivas y sancionatorias, conforme a lo establecido en la legislación aplicable, en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia o vulneración de datos personales, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Esta adecuación normativa permitirá que la Secretaría de la Contraloría asuma un rol estratégico como garante institucional de los derechos fundamentales vinculados al acceso a la información y la protección de datos personales, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas y asegurando que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la legalidad, la ética y el respeto a la dignidad humana.

Por todo lo anterior a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional sometemos a su consideración la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEPTUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO**, en los siguientes términos:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Naturaleza y Objeto

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Durango, y tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información y promover la transparencia y rendición de cuentas, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los siguientes:

I. Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado o en los municipios;

II. Distribuir las competencias de las distintas autoridades garantes, en el Estado, en materia de transparencia y acceso a la información pública, conforme a sus respectivos ámbitos de responsabilidad;

III. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública;

IV. Establecer procedimientos sencillos y expeditos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que permitan garantizar condiciones homogéneas y accesibles para las personas solicitantes;

V. Regular los medios de impugnación por parte de las autoridades garantes;

VI. Establecer las bases y la información de interés público que deben ser difundidos proactivamente por los sujetos obligados;

VII. Regular la organización y funcionamiento del Subsistema de Transparencia, así como establecer las bases de coordinación entre las personas que lo integran;

VIII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, mediante políticas públicas y mecanismos que garanticen la difusión de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, en los formatos más adecuados y accesibles para el público, tomando en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales en el Estado;

IX. Propiciar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas, con el fin de fortalecer la democracia, y

X. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y esta Ley, a través de la aplicación efectiva de medidas de apremio y sanciones que correspondan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

- I. Ajustes Razonables: Modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio, en condiciones de igualdad; de los derechos humanos;
- II. Áreas: Instancias que disponen o pueden disponer de la información pública. En el sector público, serán aquellas que estén previstas en la normatividad aplicable, según corresponda;
- III. Autoridad garante federal: Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;
- IV. Autoridades garantes: A la Contraloría del Estado, a los órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos o equivalentes, cuya competencia está establecida en la presente Ley. Para el caso de los sindicatos, su autoridad garante será el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango; para el caso de los partidos políticos, será el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana;
- V. Comité de Transparencia: Al Comité de Transparencia de cada sujeto obligado;
- VI. Contraloría del Estado: La Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango, quien es la autoridad garante del derecho de acceso a la información en el Estado de Durango y la protección de datos personales, quien además conocerá de los asuntos relacionados con los municipios;
- VII. Datos Abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada, los cuales tienen las siguientes características:
- Accesibles: los disponibles para la mayor cantidad de personas usuarias posibles, para cualquier propósito;
 - Integrales: los que contienen el tema que describen a detalle y con metadatos necesarios;
 - Gratuitos: los que no requieren contraprestación alguna para su acceso;
 - No discriminatorios: los disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;
 - Oportunos: los actualizados periódicamente, conforme se generen;
 - Permanentes: los que se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;
 - Primarios: los que provienen directamente de la fuente de origen con el mayor nivel de desagregación posible;
 - Legibles por máquinas: los que deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
 - En formatos abiertos: Los que estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y
 - De libre uso: los que requieren la cita de la fuente de origen como único requisito para su uso;
- VIII. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas y, en general, cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas y demás integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, ni el medio en el que se encuentren, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
- IX. Expediente: A la unidad documental física o electrónica compuesta por documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
- X. Formatos Abiertos: Al conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y que facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de las personas usuarias;
- XI. Formatos Accesibles: A cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a las personas solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse;
- XII. Información de Interés Público: A la que resulta relevante o útil para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación contribuye a que el público conozca las actividades que realizan los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones y como ejercen los recursos públicos, así como a exigir la rendición de cuentas y el combate a la corrupción;
- XIII. Ley: A la presente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango;
- XIV. Ley General: A la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XV. Personas servidoras públicas: A las mencionadas en el primer párrafo del artículo 175 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;

XVI. Plataforma Nacional: A la Plataforma Nacional de Transparencia;

XVII. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública;

XVIII. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos locales, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los referidos órdenes de gobierno;

XIX. Subsistema de Transparencia: Al Subsistema de Transparencia del Estado de Durango;

XX. Unidad de Transparencia: A la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados establecidos en la presente Ley; y

XXI. Versión Pública: Al documento o expediente en el que se otorga acceso a la información pública, previa eliminación u omisión de aquellas partes o secciones que se encuentren clasificadas conforme a la Ley General y la presente Ley.

Artículo 4. El derecho de acceso a la información comprende:

I. Solicitar;

II. Investigar;

III. Difundir;

IV. Buscar; y

V. Recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General, la presente Ley y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivas competencias.

La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional conforme a los términos establecidos por la Ley General y esta Ley.

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o con delitos de lesa humanidad, conforme al derecho nacional o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho mediante vías o medios, directos o indirectos.

Artículo 6. El derecho de acceso a la información y la clasificación de la información se interpretarán conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados. En todo momento, se deberá favorecer la protección más amplia de los derechos de las personas.

Para el caso de la interpretación, se podrán considerar los criterios, determinaciones y opiniones de las Autoridades garantes y los organismos internacionales en dicha materia.

Artículo 7. El lenguaje empleado en la presente Ley no busca generar discriminación alguna, por lo que las referencias o alusiones hechas en su contenido deberán entenderse en un sentido incluyente y con perspectiva de género.

CAPÍTULO II Principios Generales

Artículo 8. Las Autoridades garantes deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios rectores:

I. Certeza: Otorga seguridad y certidumbre jurídica a las personas particulares, ya que permite conocer si las acciones que realizan se ajustan a derecho y garantizan que los procedimientos sean verificables, fidedignos y confiables;

II. Congruencia: Implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado;

III. Documentación: Consiste en que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre, sin que ello implique la elaboración de documentos ad hoc para atender las solicitudes de información;

IV. Eficacia: Tutela de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública;

V. Excepcionalidad: Implica que la información podrá ser clasificada como reservada o confidencial únicamente si se actualizan los supuestos que esta Ley expresamente señala;

- VI. Exhaustividad: Significa que la respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados, con las limitantes del principio de documentación;
- VII. Imparcialidad: Deben en sus actuaciones, ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, sin inclinaciones hacia ninguna de las partes involucradas;
- VIII. Independencia: Deben actuar sin influencias que puedan afectar la imparcialidad o la eficacia del derecho de acceso a la información;
- IX. Legalidad: Ajustar su actuación a las disposiciones jurídicas aplicables, fundamentando y motivando sus resoluciones y actos;
- X. Máxima publicidad: Promover que toda la información en posesión de los sujetos obligados documentada sea pública y accesible, salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley o en otras disposiciones jurídicas aplicables, en los que podrá ser clasificada como reservada o confidencial por razones de interés público o seguridad nacional;
- XI. Objetividad: Ajustar su actuación a los supuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto para resolver, sin considerar juicios personales;
- XII. Profesionalismo: Deben sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos, que garanticen un desempeño, eficiente y eficaz en el ejercicio de su actuar, y
- XIII. Transparencia: Dar publicidad a los actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que tengan la obligación de documentar.

Artículo 9. Las Autoridades garantes deberán otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información a todas las personas, en igualdad de condiciones con las demás.

Está prohibida toda forma de discriminación que limite o impida el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en posesión de los Sujetos obligados.

Artículo 10. Toda la información pública documentada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona. Para ello, se deberán habilitar los medios y acciones disponibles, conforme a los términos y condiciones establecidos en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 11. Los Sujetos obligados en la generación, publicación y entrega de información, deberán:

I. Garantizar que esta sea accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, sin embargo, estará sujeta a un régimen de excepciones claramente definido, y

II. Procurar que se utilice un lenguaje inclusivo, claro y comprensible para cualquier persona, y en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 12. Las Autoridades garantes, en el ámbito de sus competencias, deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, sin que ello implique variar la solicitud, atendiendo al principio de congruencia.

Artículo 13. El ejercicio del derecho de acceso a la información no podrá ser restringido ni estará condicionado a que la persona solicitante acredite interés alguno, ni a que justifique el uso que hará de la información solicitada.

Artículo 14. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso a la información a personas solicitantes con discapacidad, será con algún costo.

Artículo 15. Se presume que la información debe existir cuando se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y se tenga la obligación jurídica de documentarla.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, el sujeto obligado deberá motivar la respuesta que lo justifique.

Artículo 16. Ante la negativa de acceso a la información o inexistencia, el sujeto obligado deberá indicar que la información solicitada se encuentra comprendida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta Ley o, en su caso, que no corresponde a sus facultades, competencias o funciones, o bien, no existe la obligación jurídica de documentarla.

Artículo 17. Todo procedimiento relacionado con el derecho de acceso, entrega y publicación a la información deberá:

I. Sustanciarse de manera sencilla, clara y expedita, conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley; y

II. Propiciar las condiciones necesarias para garantizar que este sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO III Sujetos Obligados

Artículo 18. Los Sujetos obligados deberán transparentar y garantizar el acceso a la información documentada en su poder, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 19. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo con su naturaleza:

- I. Constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia, así como velar por su correcto funcionamiento conforme a su normativa interna;
- II. Designar en las Unidades de Transparencia a las personas titulares que dependan directamente de la persona titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;
- III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités de Transparencia y de las Unidades de Transparencia;
- IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
- V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles;
- VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, conforme a las disposiciones aplicables;
- VII. Reportar a las Autoridades garantes competentes sobre las acciones de implementación de las disposiciones aplicables en la materia, en los términos que estos determinen;
- VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios en materia de transparencia y acceso a la información emitidos por las Autoridades garantes, así como por el Sistema Nacional y el Subsistema de Transparencia;
- IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información y la accesibilidad a estos;
- X. Cumplir con las resoluciones emitidas por las demás Autoridades garantes;
- XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional según los procedimientos que para ello se establezcan;
- XII. Difundir proactivamente la información de interés público;
- XIII. Dar atención a las recomendaciones de las Autoridades garantes;
- XIV. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable con el formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente;
- XV. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema Nacional;
- XVI. Responder las solicitudes en materia de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional en los términos y plazos establecidos en la Ley General y la presente Ley, sin perjuicio del medio en que se hayan presentado o la modalidad de reproducción y entrega solicitada; y
- XVII. Las demás que resulten de las disposiciones aplicables.

Artículo 20. Los Sujetos obligados serán responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y esta Ley, en los términos que las mismas determinen.

Artículo 21. Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, deberán cumplir con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

TÍTULO SEGUNDO RESPONSABLES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CAPÍTULO I

Subsistema de Transparencia

Artículo 22. El Subsistema de Transparencia formará parte del Sistema Nacional, el cual funcionará a través de un Comité, que tendrá las siguientes funciones:

- I. Dar a conocer al Consejo Nacional, a través de su Presidencia, las opiniones que tuvieran sobre el proyecto de política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública;
- II. Apoyar en la supervisión de la ejecución de la política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública;
- III. Presentar al Consejo Nacional un informe anual sobre sus actividades;
- IV. Impulsar acciones de coordinación entre sus integrantes que promuevan el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública;
- V. Opinar respecto de los demás asuntos que someta a su consideración el Consejo Nacional; y
- VI. Las demás que le confiera el Sistema Nacional.

Artículo 23. El Comité del Subsistema de Transparencia se integrará con una persona representante de los órganos internos de control u homólogos de las siguientes autoridades:

- I. Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Contraloría, quien lo presidirá;

- II. Poder Legislativo;
- III. Poder Judicial;
- IV. Cada uno de los Órganos Constitucionales Autónomos;
- V. Cada uno de los municipios del Estado.

Las personas integrantes del Comité del Subsistema de Transparencia, podrán ser suplidas en sus ausencias por la persona servidora pública que al efecto designen, quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior al de ellas.

Las personas integrantes del Comité de cada Subsistema de Transparencia contarán con voz y voto, y ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación por su participación.

Las decisiones del Comité del Subsistema de Transparencia se tomarán por mayoría de sus integrantes presentes. En caso de empate la persona que lo preside tendrá voto de calidad.

Artículo 24. El Comité del Subsistema de Transparencia podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones, representantes de los Sujetos obligados y de la sociedad para el desahogo de las reuniones del mismo. En todo caso, los Sujetos obligados tendrán la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones.

CAPÍTULO II

Autoridades Garantes

Artículo 25. Las Autoridades garantes serán responsables, en el ámbito de su competencia, de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 26. Las Autoridades garantes tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, los ordenamientos que les resulten aplicables, derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la presente Ley;
- II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por las personas particulares en contra de las resoluciones de los Sujetos obligados en sus respectivos ámbitos de competencia, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la Ley General;
- III. Imponer las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones que deriven de la misma;
- IV. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información, de conformidad con la política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública y las disposiciones jurídicas aplicables en la materia;
- V. Fomentar la cultura de la transparencia en el sistema educativo;
- VI. Brindar capacitación a las personas servidoras públicas y apoyo técnico a los Sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;
- VII. Establecer políticas de transparencia con sentido social, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;
- VIII. Suscribir convenios con los Sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia con sentido social;
- IX. Suscribir convenios de colaboración con las personas particulares o con sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos sean de interés público o de relevancia social;
- X. Suscribir convenios de colaboración con otras Autoridades garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;
- XI. Promover la igualdad sustantiva;
- XII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la información y en los medios de impugnación, se contemple contar con la información en lenguas indígenas y en formatos accesibles para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;
- XIII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos de atención prioritaria puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública en igualdad de circunstancias;
- XIV. Informar a la instancia competente sobre la probable responsabilidad de los Sujetos obligados que incumplan las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;
- XV. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;
- XVI. Fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica;
- XVII. Emitir recomendaciones a los Sujetos obligados, con el propósito de diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia;

XVIII. Promover la digitalización de la información pública en posesión de los Sujetos obligados y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, conforme a las políticas que establezca el Sistema Nacional; y

XIX. Las demás atribuciones que les confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 27. Las Autoridades garantes para el ejercicio y desempeño de las atribuciones que les otorga la presente Ley, tendrán la naturaleza jurídica, adscripción y estructura administrativa que se establezca en sus respectivos reglamentos interiores o análogos o acuerdos de carácter general, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 28. Las Autoridades garantes en el Estado, serán:

- I. La Secretaría de la Contraloría, para el caso del Poder Ejecutivo y de los municipios del Estado;
- II. Órgano Interno de Control u homólogos del Poder Legislativo;
- III. Órgano Interno de Control u homólogos del Poder Judicial;
- IV. Órganos Internos de Control de los distintos órganos Constitucionales Autónomos;
- V. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para el caso de los partidos políticos locales; y
- VI. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango y el Tribunal Laboral Burocrático, para el caso de los sindicatos.

Lo anterior, en los términos establecidos por la Ley General, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la presente Ley.

CAPITULO III

Comités de Transparencia y Unidades de Transparencia

Artículo 29. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, en los términos establecidos por la Ley General.

Para la integración de cada Comité de Transparencia de los Sujetos obligados, se deberá regular en la normatividad interna respectiva de cada uno de ellos.

Artículo 30. Los Sujetos obligados designarán a la persona responsable de la Unidad de Transparencia, la cual actuará de conformidad con lo establecido en la Ley General, y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales

Artículo 31. Las Autoridades garantes y los Sujetos obligados se sujetarán a lo dispuesto por el Título Cuarto denominado "Cultura de Transparencia y Apertura Institucional" de la Ley General, en relación a:

- I. La promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información;
- II. La transparencia con sentido social; y
- III. La promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura institucional.

Artículo 32. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, los Sujetos obligados podrán desarrollar entre sí, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

- I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;
- II. Armonizar el acceso a la información por sectores;
- III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y
- IV. Procurar la accesibilidad de la información.

Artículo 33. Las Autoridades garantes, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los Sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la construcción e implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura institucional.

TÍTULO CUARTO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO I

Obligaciones Generales

Artículo 34. Los Sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto denominado "Obligaciones de Transparencia", de la Ley General.

Artículo 35. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la Ley General se establezca un plazo diverso. Los Sujetos obligados deberán observar los criterios que emita el Sistema Nacional, en relación al plazo mínimo que la información deberá permanecer disponible y accesible, atendiendo a las cualidades de la misma.

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.

Artículo 36. Las Autoridades garantes y los Sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible.

Artículo 37. La información publicada por los Sujetos obligados, no constituye propaganda gubernamental, de conformidad con lo establecido por la Ley General, por lo que los Sujetos Obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en las disposiciones jurídicas en materia electoral.

Artículo 38. Los Sujetos obligados y las personas particulares serán responsables de los datos personales en su posesión de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Los Sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de las personas a que haga referencia la información de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 119 de la Ley General.

CAPÍTULO II

Obligaciones de Transparencia Comunes

Artículo 39. Los Sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada persona servidora pública y/o persona prestadora de servicios profesionales miembro de los Sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada área;

IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer, así como los que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VI. El directorio de todas las personas servidoras públicas, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VII. La remuneración bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

VIII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

IX. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

X. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

XI. La versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, en los sistemas habilitados para ello;

XII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Los programas, subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

- a) Área;
 - b) Denominación del programa;
 - c) Periodo de vigencia;
 - d) Diseño, objetivos y alcances;
 - e) Metas físicas;
 - f) Población beneficiada estimada;
 - g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;
 - h) Requisitos y procedimientos de acceso;
 - i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
 - j) Mecanismos de exigibilidad;
 - k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
 - l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
 - m) Formas de participación social;
 - n) Articulación con otros programas sociales;
 - o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
 - p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
 - q) Padrón de personas beneficiarias mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;
- XV. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;
- XVI. La información curricular, desde el nivel de jefatura de departamento o equivalente, hasta la titularidad del sujeto obligado;
- XVII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de sanción y la disposición, de conformidad a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;
- XVIII. Los servicios y trámites que ofrecen, incluyendo sus requisitos, en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
- XIX. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- XX. La información relativa a la deuda pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- XXI. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial que permita identificar el tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto de campaña;
- XXII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
- XXIII. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
- XXIV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
- XXV. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando las personas titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social de la persona titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
- XXVI. Los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza u otros procedimientos de adquisición u obra pública, incluyendo la versión pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
- a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida, u otros procedimientos de adquisición u obra pública:
 1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
 2. Los nombres de las personas participantes o invitadas;
 3. El nombre de la persona ganadora y las razones que lo justifican;
 4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
 7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
 9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
 11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
 13. El convenio de terminación, y
 14. El finiquito, y
- b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
 3. La autorización del ejercicio de la opción;
 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de proveedores y los montos;
 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
 10. El convenio de terminación, y
 11. El finiquito;
- XXVII. Los informes que generen de conformidad con las disposiciones jurídicas;
- XXVIII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones;
- XXIX. Los informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
- XXX. El Padrón de proveedores y contratistas en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
- XXXI. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
- XXXII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
- XXXIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;
- XXXIV. Las resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;
- XXXV. Los mecanismos de participación ciudadana;
- XXXVI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
- XXXVII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos obligados;
- XXXVIII. Las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;
- XXXIX. Los estudios financiados con recursos públicos;
- XL. El listado de personas jubiladas y pensionadas, así como el monto que reciben;
- XLI. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino;
- XLII. Las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
- XLIII. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
- XLIV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que, en su caso, emitan los consejos consultivos; y
- XLV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, y la que se encuentre prevista en otras disposiciones jurídicas aplicables.
- Los Sujetos obligados deberán informar a las Autoridades garantes de forma fundada y motivada cuáles son las fracciones de este artículo que les resultan aplicables para efecto de que las Autoridades las validen.
- Una vez que cuenten con la validación de referencia los Sujetos obligados procederán a publicarlas en la Plataforma Nacional.

CAPÍTULO III

Obligaciones Específicas

Artículo 40. Los Sujetos obligados del Poder Ejecutivo, además de lo señalado en el artículo anterior, deberán poner a disposición del público y actualizar, conforme al ámbito de su competencia la información siguiente:

- I. El Plan Estatal de Desarrollo;
- II. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
- III. Las expropiaciones decretadas y ejecutadas, que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
- IV. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes a quienes se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos;
- V. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;
- VI. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones;
- VII. El listado de los decretos administrativos que se expiden por materia;
- VIII. El listado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se encuentren en trámite, así como las resoluciones de las mismas que hayan causado estado;
- IX. Los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;
- X. Los proyectos de disposiciones administrativas, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, en términos de lo previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria;
- XI. Las estadísticas sobre indultos, juicios en trámite, resoluciones ejecutorias, por delito, por grado de los sentenciados, por año y sentencias cumplidas, y
 - I. En materia hacendaria:
 - a) La cartera de programas y proyectos de inversión;
 - b) Para efectos estadísticos, la lista de estímulos fiscales establecidos en las leyes fiscales, identificados por acreditamientos, devoluciones, disminuciones, y deducciones, tanto de personas físicas, como morales, así como su porcentaje, y
 - c) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes a quienes se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, ya determinado y exigible, así como los montos respectivos; debiendo vincular tales actos con los datos de identificación de contribuyentes señalados en este párrafo. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales.
 - II. En materia de seguridad pública y procuración de justicia:
 - a) Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente;
 - b) La estadística de los procesos de control de confianza desagregada por institución;
 - c) La incidencia delictiva del fuero común, desagregada por tipo de delito, así como el número de víctimas desagregado por sexo y rango de edad;
 - d) Indicadores de la procuración de justicia. En materia de carpetas de investigación y averiguaciones previas, deberá publicarse el número de aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se ejerció la facultad de atracción en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión; en cuántas se ejerció el criterio de oportunidad, y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los hechos de su conocimiento. Dicha información deberá incluir el número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, y
 - e) Número de órdenes de presentación, aprehensión y de cateo emitidas.

f) La estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes, y

g) La estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, desagregada por medios de mediación, conciliación y junta restaurativa;

III. En materia del medio ambiente y recursos naturales:

a) El listado de áreas naturales protegidas, que contenga categoría, superficie y región que la comprenda;

b) El listado de especies en riesgo, por grupo taxonómico;

c) El listado de vegetación natural, por región, por ecosistema y por superficie;

d) El listado estimado de residuos, por tipo, por volumen, por región y por año;

e) La disponibilidad media anual de aguas superficiales y subterráneas por región hidrológica;

f) El Inventario de plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas residuales;

g) El listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización;

h) Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales protegidas;

i) La dinámica de cambio de la vegetación forestal del Estado, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales;

j) Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;

k) El listado de plantaciones comerciales forestales, que contenga su ubicación, superficie, tipo de especie forestal, nivel de producción y su estatus;

l) Las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental;

m) Información estadística sobre los árboles históricos y notables del Estado;

n) Información estadística sobre infracciones, identificando la causa que haya motivado la infracción, el precepto legal infringido y la descripción de la infracción, y

El índice de participación ciudadana, que contenga la categoría, ponderación, unidad de medida y año;

IV. En materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación:

a) El listado de apoyos otorgados en materia de agricultura, ganadería, pesca o alimentación, que contenga municipio, población o localidad, descripción o monto del apoyo, y el número de beneficiarios distinguidos por género;

b) El listado de ingenios azucareros, que contenga producción, costo anual y región;

c) El listado de activos y unidades económicas de pesca y acuicultura, que contenga región, embarcaciones, granjas, laboratorios y tipo de actividad;

d) El listado de agronegocios, empresas rurales y productores que reciben incentivos de riesgo compartido, que contenga objetivo y tipo de incentivo, y

f) La lista de certificaciones emitidas para la importación o exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, desagregada por tipo de mercancía, origen, punto de ingreso, tránsito y destino; y en caso de negativa, las medidas sanitarias o fitosanitarias pertinentes como el retorno, acondicionamiento, reacondicionamiento o destrucción de la mercancía;

V. En materia del sector educación y cultura:

a) El Catálogo de los Centros de Trabajo de carácter educativo en la educación básica, media superior, superior, especial, inicial y formación para el trabajo incluyendo la información relativa a su situación geográfica, tipo de servicio que proporciona y estatus de operación;

b) El listado del personal que presta sus servicios en los sistemas de educación pública básica, tecnológica y de adultos, cuyas remuneraciones se cubren con cargo a recursos públicos del Estado;

c) El padrón de beneficiarios de las becas, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlas, desagregado por nombre, tipo, fecha de inicio y término de la beca, área del conocimiento, así como el monto otorgado, y

d) El Catálogo de museos, que contenga el nombre, poblado/municipio, ubicación, horarios, temática tratada, servicios disponibles y cuota de acceso;

VI. En materia de salud:

a) El listado de los institutos o centros de salud, desagregados por nombre, especialidad, dirección y teléfono, y

b) El listado de las instituciones de beneficencia privada, que tengan por objeto la asistencia pública, desagregada por nombre, ubicación, datos de contacto y tipo;

VII. En materia del trabajo y previsión social:

a) El nombre y objeto de las asociaciones obreras y patronales registradas;

b) El número de personas beneficiadas por las actividades de capacitación, promoción al empleo, colocación de trabajadores y vinculación laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por año, región/municipio, oficio o profesión, género, rango de edad, ramo o industria y mecanismo de vinculación;

VIII. En materia de turismo:

a) Información estadística sobre las actividades económicas vinculadas al turismo, como número de visitantes, flujos aéreos y flujos carreteros;

b) Información correspondiente a destinos turísticos por región, con estadísticas sobre actividades turísticas;

c) Información estadística sobre ocupación hotelera, y

d) El listado de prestadores de servicios turísticos.

Artículo 41. Los Sujetos obligados del Poder Legislativo, además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

I. Agenda legislativa;

II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día;

IV. El Diario de Debates;

V. Las versiones estenográficas;

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

VII. El listado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se encuentren en trámite, así como las resoluciones de las mismas que hayan causado Estado;

VIII. Los nombres, fotografía y currículum de los Diputados, incluyendo los suplentes, así como, en su caso, las comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realicen en los órganos legislativos;

IX. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

X. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

XI. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las Comisiones y Comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

XII. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

XIII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XIV. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XV. Los dictámenes de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los estados financieros de los organismos públicos autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización, en los términos de la ley de la materia;

XVI. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XVII. Las versiones de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;

XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen el Centro de Investigación y Estudios legislativos,

XIX. Los informes de actividades que presentan los Diputados, el lugar donde los realizan y el origen de los recursos que utilizan, y

XX. El padrón de cabilderos, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 42. Los Sujetos obligados del Poder Judicial, además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

II. Las versiones públicas de todas las sentencias y laudos emitidas;

III. Las versiones estenográficas, los audios y las videograbaciones de las sesiones públicas, según corresponda;

IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados;

V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen;

VI. Sobre los procedimientos de designación de jueces y magistrados: la convocatoria, el registro de aspirantes, la lista de aspirantes aceptados, la lista de los aspirantes que avanzan cada una de las etapas, el resultado de las evaluaciones de cada etapa protegiendo, en su caso, los datos personales de los aspirantes y la lista de vencedores;

VII. Sobre los procedimientos de ratificación: la resolución definitiva donde se plasmen las razones de esa determinación;

VIII. Las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integrantes del Poder Judicial, de conformidad a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Los indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional que, conforme a sus funciones, deban establecer, publicitando por lo menos los números de ingresos de asuntos nuevos por mes y por año, números de resoluciones emitidas por mes y por año, sentido general del fallo de acuerdo con la materia, tiempo promedio de resolución de asuntos, número de impugnaciones recibidas por mes y por año, número de impugnaciones declaradas procedentes por mes y por año;

X. Las disposiciones de observancia general emitidas por los Plenos o sus presidentes, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

XI. Los votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de cualquier otro tipo, que emitan los integrantes de los Plenos, y

XII. Las resoluciones recaídas a los asuntos de contradicciones de criterios.

Artículo 43. Los sujetos obligados de los municipios, además de lo señalado en el Artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

I. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos;

II. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones y el sentido de votación de sus miembros sobre las iniciativas o acuerdos;

III. Los municipios que cuenten con población indígena asentada de manera permanente o temporal, deberán implementar los mecanismos para que la información referida esté disponible en las lenguas indígenas correspondientes, utilizando los medios idóneos que permitan su comunicación en forma comprensible para todos, y

IV. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales.

Artículo 44. Los órganos constitucionales autónomos, además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

I. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana:

- a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;
- b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;
- c) La geografía y cartografía electoral;
- d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;
- e) El Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots del instituto electoral y de los partidos políticos;
- f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;
- g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;
- h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
- i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
- j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
- k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;
- l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
- m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y
- n) El monitoreo de medios;

II. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango:

- a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;
- b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;
- c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;
- d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes, giradas una vez concluido el Expediente;
- e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;
- f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;
- g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;
- h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;
- i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;
- j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;
- k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
- l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de derechos humanos, y
- m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

III. Fiscalía General del Estado:

- a) Las estadísticas e Indicadores de la procuración de justicia e incidencia delictiva incluyendo el número de denuncias o querellas que fueron interpuestas. Una versión pública del número de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual a la prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Durango, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contados a partir de que dicha determinación haya quedado firme;
- b) Las estadísticas relativas al Centro de Justicia para la Mujer referentes a la incidencia delictiva y procuración de justicia, incluyendo el número de denuncias o querellas que fueron interpuestas; y
- c) Resultados de certificaciones, programa de contrataciones e Indicadores de desempeño; y

IV. Tribunal Electoral del Estado de Durango:

- a) Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
- b) Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
- c) La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los magistrados;
- y
- d) La lista de acuerdos que se publique.

Artículo 45. Además de lo señalado en el artículo 39, las Autoridades garantes deberán poner a disposición del público y actualizar:

- I. La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los Sujetos obligados a las personas solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;
- II. Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
- III. Los resultados de la evaluación que, en su caso, se realice al cumplimiento de la presente Ley por parte de los Sujetos obligados;
- IV. En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y
- V. El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los Sujetos obligados.

Artículo 46. Las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

- I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos, formas y costos de titulación;
- II. La información relacionada con sus procedimientos administrativos;
- III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, nivel y monto;
- IV. La lista de los Profesores activos, incluyendo a los profesores con licencia o en año sabático;
- V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;
- VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;
- VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
- VIII. El resultado de las evaluaciones del cuerpo docente;
- IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación;
- X. El número de personas estudiantes inscritas, desglosado por área de conocimiento, tipo de sistema de estudios, modalidad de estudio, grado académico y denominación o título del grado, y
- XI. El número de personas egresadas y tituladas, desglosado por área de conocimiento, tipo de sistema de estudios, modalidad de estudio, grado académico y denominación o título del grado.

Artículo 47. Los partidos políticos locales, las agrupaciones políticas estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

- I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;
- II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
- III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
- IV. Los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
- V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
- VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
- VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
- VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
- IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;
- X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
- XI. El acta de la asamblea constitutiva;
- XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;
- XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
- XIV. Los documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
- XV. El directorio de sus órganos de dirección estatales, municipales y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

- XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
- XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;
- XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;
- XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;
- XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
- XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;
- XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
- XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
- XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
- XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
- XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;
- XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
- XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;
- XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y
- XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

Artículo 48. Los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la información siguiente:

- I. El nombre de la persona servidora pública y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;
- II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;
- III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitado, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;
- IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;
- V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público;
- VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;
- VII. Causas portas que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y
- VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

Artículo 49. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la información de los sindicatos siguiente:

- I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:
 - a) El domicilio;
 - b) Número de registro;
 - c) Nombre del sindicato;
 - d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia;
 - e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
 - f) Número de socios;

- g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y
- h) Central a la que pertenezcan, en su caso;
- II. Las tomas de nota;
- III. El estatuto;
- IV. Las actas de asamblea;
- V. Los reglamentos interiores de trabajo;
- VI. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y
- VII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a las personas solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 50. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, la información aplicable del artículo 39 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

- I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
- II. El directorio del Comité Ejecutivo, y
- III. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. Los Sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de internet para que estos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Artículo 51. Para determinar la información adicional que publicarán todos los Sujetos obligados de manera obligatoria, las Autoridades garantes deberán:

- I. Solicitar a los Sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;
- II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que las disposiciones jurídicas aplicables le otorguen, y
- III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.

CAPÍTULO IV

Obligaciones Específicas de las Personas Físicas o Morales que Reciben y Ejercen Recursos Públicos o Ejercen Actos de Autoridad

Artículo 52. Las Autoridades garantes, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los Sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Los Sujetos obligados correspondientes deberán enviar a las Autoridades garantes un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, las Autoridades garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

Artículo 53. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, las Autoridades garantes deberán realizar el procedimiento establecido en el artículo 81 de la Ley General.

CAPÍTULO V

Verificación de las Obligaciones de Transparencia y Denuncias por su Incumplimiento

Artículo 54. Las Autoridades garantes, en su ámbito de competencia, vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen los Sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en la Ley General y esta Ley.

Artículo 55. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo se realizarán de manera oficiosa por las Autoridades garantes, a través de la revisión aleatoria o muestral y periódica al portal de internet de los Sujetos obligados o a la Plataforma Nacional.

Artículo 56. La verificación que realicen las Autoridades garantes se sujetará a lo siguiente:

- I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;
- II. Emitir un dictamen en el que podrá determinar que el sujeto obligado cumple o no con lo establecido por esta Ley y demás disposiciones. En el supuesto de que determine que no da cumplimiento formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas e informe la atención a los requerimientos dentro de un plazo no mayor a veinte días, y
- III. Verificar el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si considera que fueron atendidos los requerimientos del dictamen, emitirá un acuerdo de cumplimiento.

Las Autoridades garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que consideren necesarios para llevar a cabo la verificación.

Cuando las Autoridades garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a diez días, dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que las Autoridades garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días impondrán las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

Adicionalmente, las Autoridades garantes podrán emitir recomendaciones a los Sujetos obligados, a fin de procurar que los formatos en que se publique la información, sea de mayor utilidad.

Artículo 57. Cualquier persona podrá denunciar ante las Autoridades garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 58. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:

- I. Presentación de la denuncia ante las Autoridades garantes;
- II. Solicitud por parte de las Autoridades garantes de un informe al sujeto obligado;
- III. Resolución de la denuncia, y
- IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 59. El contenido, forma de presentación, así como el procedimiento que debe darse a las denuncias por incumplimiento, se ajustará a lo previsto en el Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General.

TÍTULO QUINTO INFORMACIÓN CLASIFICADA CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales de la Clasificación y Desclasificación de la Información

Artículo 60. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Las personas titulares de las áreas de los Sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley, mediante acuerdo que clasifique la información.

Los Sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información previstas en el Título Sexto de la Ley General y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley General y el presente ordenamiento.

Los Sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en la Ley General y la presente Ley, como información clasificada.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 61. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.

Artículo 62. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

- I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social;

- II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
- III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
- IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los Sujetos obligados del sector público federal;
- V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
- VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
- VII. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la Conducción o los derechos del debido proceso en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de una persona denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
- IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a las personas servidoras públicas, en tanto la resolución administrativa no haya causado estado;
- X. Afecte los derechos del debido proceso;
- XI. Afecte o vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, incluidos los de denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias o afecte la administración de justicia o la seguridad de una persona denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables en tanto no hayan causado estado;
- XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
- XIII. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;
- XIV. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y
- XV. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 63. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

- I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
- II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción acreditados de acuerdo con las leyes aplicables.

Artículo 64. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

- I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
- II. Expire el plazo de clasificación;
- III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información;
- IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el Título Sexto de la Ley General y la presente Ley; y
- V. Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo 62 de esta Ley podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

Excepcionalmente, los Sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias

expuestas en la fracción IV del artículo 62 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente a la Autoridad garante, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.

Artículo 65. Se considera información confidencial, la siguiente:

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
- II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a las personas particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;
- III. Aquella que presenten las personas particulares a los Sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales; y
- IV. El pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y/o procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas y particulares que se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.

Artículo 66. Para que los Sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de las personas particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

- I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
- II. Por ley tenga el carácter de pública;
- III. Exista una orden judicial;
- IV. Por razones de seguridad estatal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o
- V. Cuando se transmita entre Sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, la Autoridad garante, debidamente fundada y motivada, deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

Artículo 67. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.

En las versiones públicas no podrá omitirse la información que constituya obligaciones de transparencia previstas en la Ley General y la presente Ley.

TÍTULO SEXTO PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales

Artículo 68. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante las Unidades de Transparencia de los Sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Título Séptimo de la Ley General.

Las solicitudes de acceso a la información se podrán realizar a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Las solicitudes de acceso a la Información deberán resolverse y notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud; excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

Artículo 69. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

- I. Medio para recibir notificaciones;
- II. La descripción de la información solicitada, y
- III. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la

expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, la persona solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

Artículo 70. Cuando los detalles proporcionados en la solicitud de acceso a información resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, para localizar la información solicitada, la Unidad de Transparencia podrá requerir a la persona solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 68 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando las personas solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 71. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Artículo 72. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo a la persona solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar a la persona solicitante el o los Sujetos obligados competentes.

Si los Sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte.

Artículo 73. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.

Artículo 74. En caso de existir costos para obtener la Información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la Información;
- II. El costo de envío, en su caso; y
- III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Ingresos correspondiente al Estado o a los Municipios según sea el caso, los cuales se publicarán en los sitios de internet de los Sujetos obligados correspondientes. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la Información que solicitó.

Los Sujetos obligados a los que no sean aplicables las leyes de ingresos a que se refiere el párrafo anterior, deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dichas leyes.

La Información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO SÉPTIMO PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN CAPÍTULO I

Recurso de Revisión

Artículo 75. La persona solicitante podrá interponer, por sí mismo o por conducto de su representante, de manera física o por medios electrónicos, recurso de revisión ante la Autoridad garante que corresponda, o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, esta deberá remitir el recurso de revisión a la Autoridad garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

El recurso de revisión se sustanciará en términos de lo establecido en el Capítulo I del Título Octavo de la Ley General.

Artículo 76. El recurso de revisión procede en contra de:

- I. La clasificación de la información;

- II. La declaración de inexistencia de información;
- III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
- IV. La entrega de información incompleta;
- V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
- VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;
- VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;
- VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para la persona solicitante;
- IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
- X. La falta de trámite a una solicitud;
- XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
- XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o
- XIII. La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los Sujetos obligados derivada de la resolución al recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI de este artículo, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante la Autoridad garante correspondiente.

Artículo 77. La Autoridad garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. Durante el procedimiento debe aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 78. Las Autoridades garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

- I. Interpuesto el recurso de revisión deberán proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento;
- II. Admitido el recurso de revisión deberán integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga. De considerarse improcedente el recurso, deberá desecharse mediante acuerdo fundado y motivado, dentro de un plazo máximo de cinco días contados a partir de la conclusión del plazo otorgado a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, debiendo notificarle dentro de los tres días siguientes a la emisión del acuerdo;
- III. En caso de existir persona tercera interesada, se le hará la notificación para que en el plazo mencionado en la fracción anterior acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;
- IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los Sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho. Se recibirán aquellas pruebas que resulten Supervinientes por las partes, mismas que serán tomadas en cuenta, siempre y cuando no se haya dictado la resolución;
- V. Podrán determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;
- VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, procederán a decretar el cierre de instrucción. Asimismo, a solicitud de los Sujetos obligados o los recurrentes, los recibirán en audiencia, a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión;
- VII. No estarán obligadas a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y
- VIII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días.

Artículo 79. Las resoluciones de las Autoridades garantes podrán:

- I. Desechar o sobreseer el recurso;
- II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
- III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, las Autoridades garantes previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 80. Las Autoridades garantes deben notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los Sujetos obligados deben informar a las Autoridades garantes de que se trate, el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 81. Las resoluciones de las Autoridades garantes son vinculatorias, definitivas e inatacables para los Sujetos obligados.

Las personas particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de las Autoridades garantes por la vía del recurso de inconformidad, en los casos previstos en el Capítulo II del Título Octavo de la Ley General, o ante los jueces y tribunales especializados en materia de transparencia establecidos por el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo.

CAPÍTULO II

Recurso de Inconformidad

Artículo 82. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por las Autoridades garantes locales cuando se encuentren vinculadas con solicitudes de información concernientes a recursos públicos federales que:

I. Confirman o modifiquen la clasificación de la información vinculada con recursos públicos federales; o

II. Confirman la inexistencia o negativa de información vinculada con recursos públicos federales. Se entenderá como negativa de acceso a la información, la falta de resolución de las Autoridades garantes locales dentro del plazo previsto para ello.

Artículo 83. El recurso de inconformidad debe presentarse dentro de los quince días posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante el sistema electrónico o por escrito, ante la Autoridad garante federal o local que hubiere emitido la resolución.

En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante las Autoridades garantes locales, esta deberá hacerlo del conocimiento a la Autoridad garante federal al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional. Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional.

El recurso de inconformidad se sustanciará en términos de lo establecido en el Capítulo II del Título Octavo de la Ley General.

Artículo 84. En los casos en que por conducto del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo decidido en el recurso de revisión, la Autoridad garante local, señalada como responsable y que fuera la que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la inconformidad.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, las Autoridades garantes locales, de manera fundada y motivada, podrán solicitar a la Autoridad garante federal una ampliación de plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual debe realizarse a más tardar cinco días antes de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que dicha Autoridad garante federal resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición.

Artículo 85. Una vez emitida la nueva resolución por la Autoridad garantes local responsable, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional a la Autoridad garante federal, así como al sujeto obligado que corresponda, a través de su Unidad de Transparencia para efecto del cumplimiento.

Artículo 86. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia debe cumplir con la nueva resolución que le hubiere notificado la Contraloría del Estado en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución de referencia.

Artículo 87. Las medidas de apremio previstas en esta Ley resultarán aplicables para efectos del cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de apremio deben establecerse en la propia resolución.

Artículo 88. La resolución de la Autoridad garante federal será definitiva e inatacable para las Autoridades garantes locales y el sujeto obligado de que se trate.

Las personas particulares podrán impugnar las resoluciones de la Autoridad garante federal ante los jueces y tribunales especializados en materia de transparencia establecidos por el Poder Judicial de la Federación.

CAPÍTULO III

Cumplimiento de las Resoluciones

Artículo 89. Los Sujetos obligados deben, por medio de sus Unidades de Transparencia, dar estricto cumplimiento a las resoluciones de las Autoridades garantes, y deberán informar a estos sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los Sujetos obligados podrán solicitar a las Autoridades garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución, en los términos de lo previsto en el Capítulo V del Título Octavo de la Ley General.

TÍTULO OCTAVO MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES CAPÍTULO I

Medidas de Apremio

Artículo 90. Las Autoridades garantes, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán imponer a la persona servidora pública encargada de cumplir con la resolución, o a las y los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

I. Amonestación pública, o

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el incumplimiento.

Artículo 91. El incumplimiento de los Sujetos obligados será difundido en la Plataforma Nacional y en los portales de obligaciones de transparencia de las Autoridades garantes y considerado en las evaluaciones que realicen estas.

En caso de reincidencia, las Autoridades garantes podrán imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado por las mismas.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas previstas en esta Ley, la Autoridad garante respectiva deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 92. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, en su caso, determinará las sanciones que correspondan.

Artículo 93. La amonestación pública será impuesta y ejecutada por las Autoridades garantes, a excepción de cuando se trate de personas servidoras públicas, en cuyo caso será ejecutada por el superior jerárquico inmediato de la persona infractora con el que se relacione.

Las multas que fijen las Autoridades garantes se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas y de Administración, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

CAPÍTULO II Sanciones

Artículo 94. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la Ley General y la presente Ley, al menos las siguientes:

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley General y el presente ordenamiento;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los Sujetos obligados y de sus personas servidoras públicas o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por personas usuarias en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la normatividad aplicable;

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

IX. No documentar el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Realizar actos para intimidar a las personas solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

XII. Clasificar como reservada la información sin que se cumplan las características señaladas en la Ley General y la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa de las Autoridades garantes, que haya quedado firme;

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando Autoridades garantes, determinen que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la Ley General o en el presente ordenamiento, emitidos por las Autoridades garantes, o

XV. No acatar las resoluciones emitidas por las Autoridades garantes, en ejercicio de sus funciones.

Artículo 95. Para determinar el monto de las multas y calificar las sanciones establecidas en el presente Capítulo, la Autoridad garante deberá considerar:

I. La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes, y la afectación al ejercicio de sus atribuciones;

II. La condición económica de la persona infractora;

III. La reincidencia; y

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse.

Artículo 96. Con independencia del carácter de las personas presuntas infractoras, las Autoridades garantes para conocer, investigar, remitir documentación y, en su caso, sancionar, prescribirán en un plazo de cinco años a partir del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 97. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 94 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, las Autoridades garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 98. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, las Autoridades garantes darán vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, las Autoridades garantes deberán dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con estos, cuando sean personas servidoras públicas, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 99. En aquellos casos en que la persona presunta infractora tenga la calidad de persona servidora pública, las Autoridades garantes deberán remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción a la autoridad denunciante.

Artículo 100. Cuando se trate de personas presuntas infractoras que no cuenten con la calidad de personas servidoras públicas, las Autoridades garantes serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley, y llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.

El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe la Autoridad garante a la persona presunta infractora, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, la autoridad competente que conozca del procedimiento resolverá de inmediato con los elementos de convicción que disponga.

La Autoridad garante admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Una vez desahogadas las pruebas, la Autoridad garante notificará a la persona presunta

infractora el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, la Autoridad garante resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona presunta infractora y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

Cuando haya causa justificada debidamente fundada y motivada, la autoridad que conozca del asunto podrá ampliar el plazo de resolución por una sola vez y hasta por un periodo igual.

Artículo 101. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de Sujetos obligados que no cuenten con la calidad de persona servidora pública, serán sancionadas con:

I. Apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 94 de esta Ley.

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

II. Multa de doscientas cincuenta a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 94 de esta Ley, y

III. Multa de ochocientos a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 94 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.

Artículo 102. En Caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes implique la presunta comisión de un delito, estos deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Artículo 103. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Del Estado De Durango publicada en el periódico oficial no. 4 ext. de fecha 4 de mayo de 2016. Decreto 553, LXVI legislatura.

TERCERO. Se autoriza a la persona titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Durango para que realice las Adecuaciones presupuestarias suficientes para la implementación de esta Ley, hasta en tanto no se autoricen las partidas correspondientes en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal vigente.

CUARTO. Se extingue el Órgano Constitucional Autónomo, denominado Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación el cual iniciará dentro de los 10 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO. El Consejo General del Órgano Constitucional Autónomo, denominado Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, continuará en funciones hasta concluir el proceso de liquidación del Instituto de acuerdo al Decreto de la reforma Constitucional Local en materia de simplificación orgánica.

SEXTO. La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, será la responsable de sancionar el proceso de entrega-recepción del organismo que se extingue mediante el presente Decreto.

SÉPTIMO. Los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, serán respetados, en términos de la legislación aplicable.

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales transferirá los recursos materiales y financieros correspondientes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango, de acuerdo a la determinación que tome el liquidador, a fin de que esa dependencia realice las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

OCTAVO. Los registros, padrones y sistemas, internos y externos, con los que cuenta el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los sistemas informáticos utilizados por dicho Instituto, incluso los que ya no se utilicen, pero contengan registros históricos, incluida su documentación y titularidad, serán transferidos a la

Secretaría de Contraloría del Estado de acuerdo al proceso de entrega-recepción correspondiente.

NOVENO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información pública, denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y en materia de datos personales, se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio ante la Secretaría de Contraloría y las Autoridades Garantes que resulten competentes de acuerdo a la presente Ley.

DÉCIMO. Los municipios con población mayor a ochenta mil habitantes fungirán como Autoridades garantes, a través de sus Órganos Internos de Control o equivalentes, de conformidad con lo señalado en la presente Ley.

DÉCIMO PRIMERO. Las Autoridades Garantes deberá expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos y demás disposiciones aplicables, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de armonizarlos a lo previsto en el mismo.

DÉCIMO SEGUNDO. Los expedientes y archivos que estén a cargo del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio de sus facultades sustantivas, competencias o funciones, de conformidad con la Ley General de Archivos y demás disposiciones jurídicas aplicables, serán transferidos a la Secretaría General de Gobierno del Estado de acuerdo al proceso de entrega-recepción.

DÉCIMO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto se abrogan las disposiciones que se contrapongan.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la **LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS**, en los siguientes términos:

**LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE DURANGO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Objeto de la Ley**

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Durango y tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Durango de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

- I. Establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados;
- II. Distribuir competencias entre las autoridades garantes, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados;
- III. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos;
- IV. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
- V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, de la Entidad, partidos políticos y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento;
- VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales;
- VII. Fijar obligaciones a los sujetos obligados respecto al manejo, conservación, seguridad y confidencialidad de los datos personales;
- VIII. Establecer los recursos y procedimientos legales necesarios para reportar vulneraciones al derecho a la protección de datos personales.
- IX. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales, y
- X. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales;

II. Autoridades garantes: A la Contraloría del Estado, a los órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos o equivalentes, cuya competencia está establecida en la presente Ley.

III. Aviso de privacidad: Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos, el cual podrá ser integral o simplificado;

IV. Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;

V. Contraloría del Estado: A la Autoridad garante de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, quien además conocerá de los asuntos relacionados con los municipios

VI. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y sus Municipios;

VII. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;

VIII. Datos personales: A cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

IX. Datos personales sensibles: A aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

X. Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

XI. Disociación: Procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse a la persona titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de la misma;

XII. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;

XIII. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de las personas titulares, así como los deberes de los responsables y las personas encargadas, previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XV. Ley: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango;

XVI. Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;

XVII. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango;

XVIII. Medidas compensatorias: A los mecanismos alternos para dar a conocer a las personas titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio alcance;

XIX. Medidas de seguridad: Al Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales;

XX. Medidas de seguridad administrativas: A las Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales;

XXI. Medidas de seguridad físicas: Al Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

- a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;
- b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, recursos e información;
- c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización;
- d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad;
- e) Elaborar protocolos de resguardo de información en casos de desastres naturales o algún tipo de emergencia; y
- f) Proveer de vigilancia y monitoreo a fin de una adecuada supervisión de áreas específicas o sensibles donde se resguarden datos personales y recursos involucrados.

XXII. Medidas de seguridad técnicas: Al Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

- a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;
- b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;
- c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y
- d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales;

XXIII. Periódico oficial: Periódico Oficial del Estado de Durango;

XXIV. Persona Encargada: A la persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización de la persona responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta de la persona responsable;

XXV. Persona Titular: Sujeto a quien corresponden los datos personales;

XXVI. Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXVII. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y la persona encargada, dentro o fuera del territorio mexicano;

XXVIII. Responsable: Sujetos obligados a que se refiere la fracción XXVII del presente artículo que deciden sobre el tratamiento de datos personales;

XXIX. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, cualquier otra autoridad en el ámbito estatal y municipal, así como las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

En el caso de los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

XXX. Supresión: Baja archivística de los datos personales conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de archivos, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable;

XXXI. Transferencia: A toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta de la titular, del responsable o de la persona encargada;

XXXII. Tratamiento: A cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, y

XXXIII. Unidad de Transparencia: La Instancia a la que hace referencia el artículo 40 de la Ley de Transparencia.

Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de acceso público:

I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general;

II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;

III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes;

IV. Los medios de comunicación social, y

V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.

Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados fuentes de acceso público será necesario que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. No se considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o tenga una procedencia ilícita.

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona titular o, en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 16 de esta Ley.

En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos personales.

Artículo 9. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango.

TÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS CAPÍTULO I Principios

Artículo 10. El responsable deberá observar los principios de:

- a) Licitud;
- b) Finalidad;
- c) Lealtad;
- d) Consentimiento;
- e) Calidad;
- f) Proporcionalidad;
- g) Información; y
- h) Responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

Artículo 11. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquellas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la legislación aplicable y medie el consentimiento de la persona titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 12. El responsable deberá contar con el consentimiento previo de la Persona Titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad de la Persona Titular;

II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento; y

III. Informada: Que la Persona Titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

En la obtención del consentimiento de personas menores de edad o que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, se estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable.

El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita.

El consentimiento es expreso cuando la voluntad de la Persona Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de la Persona Titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la persona titular el aviso de privacidad, esta no manifieste su voluntad en sentido contrario.

Artículo 13. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la Persona Titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:

I. Cuando una legislación aplicable así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley; en ningún caso podrán contravenirlas;

II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente;

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos de la Persona Titular ante autoridad competente;

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la Persona Titular y el responsable;

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia sanitaria;

VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;

IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; o

X. Cuando la Persona Titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de las disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 14. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad de estos.

Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando estos son proporcionados directamente por la persona titular y hasta que este no manifieste y acredite lo contrario.

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos.

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales.

Artículo 15. El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos.

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales.

Artículo 16. El responsable solo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Artículo 17. El responsable deberá informar a la persona titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.

El aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable, asimismo, deberá ponerse a disposición en su modalidad simplificada.

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla.

Cuando resulte imposible dar a conocer a la Persona Titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita la secretaría.

Artículo 18. El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. La denominación y el domicilio del responsable;

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles;

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el consentimiento de la Persona Titular;

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO;

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia;

VII. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y

b) Las finalidades de estas transferencias;

VIII. Los mecanismos y medios disponibles para que la Persona Titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento de la persona titular; y

IX. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a las personas titulares los cambios al aviso de privacidad.

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción VIII de este artículo deberán estar disponibles para que la Persona Titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran su consentimiento, previo a que ocurra dicho tratamiento.

Artículo 19. El aviso de privacidad en su modalidad simplificada deberá contener la información a que se refieren las fracciones I, IV, VII y VIII del artículo anterior y señalar el sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.

La puesta a disposición del aviso de privacidad a que refiere este artículo no exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que la Persona Titular pueda conocer el contenido integral del aviso de privacidad.

Artículo 20. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes:

I. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales;

II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable,

III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales;

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las modificaciones que se requieran;

V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales;

VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de las Personas Titulares;

VII. Diseñar, desarrollar e implementar políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General, la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia; y

VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la Ley General, la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia.

Capítulo II De los Deberes

Artículo 21. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Artículo 22. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:

- I. El riesgo inherente a los datos personales tratados;
- II. La sensibilidad de los datos personales tratados;
- III. El desarrollo tecnológico;
- IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para las personas titulares;
- V. Las transferencias de datos personales que se realicen;
- VI. El número de personas titulares;
- VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento; y
- VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

Artículo 23. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas:

- I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
- II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales;
- III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
- IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros;
- V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del responsable;
- VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales;
- VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales; y
- VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

Artículo 24. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión. Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas que le resulten aplicables en la materia.

Artículo 25. El responsable deberá elaborar un documento de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente:

- I. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
- II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;
- III. El análisis de riesgos;
- IV. El análisis de brecha;
- V. El plan de trabajo;
- VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad; y
- VII. El programa general de capacitación.

Artículo 26. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los siguientes eventos:

- I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo;
- II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión;
- III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida, y
- IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

Artículo 27. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.

Artículo 28. Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las siguientes:

- I. La pérdida o destrucción no autorizada;
- II. El robo, extravío o copia no autorizada;
- III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o
- IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Artículo 29. El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad en la que se describa esta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de la misma y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.

Artículo 30. El responsable deberá informar sin dilación alguna a la persona titular, y según corresponda a las autoridades garantes, las vulneraciones que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y que el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a dar inicio a un proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que las personas titulares afectadas puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos.

Artículo 31. El responsable deberá informar a la persona titular al menos lo siguiente:

- I. La naturaleza del incidente;
- II. Los datos personales comprometidos;
- III. Las recomendaciones acerca de las medidas que la persona titular pueda adoptar para proteger sus intereses;
- V. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; y
- VI. Los medios donde puede obtener más información al respecto.

Artículo 32. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública.

TÍTULO TERCERO DERECHOS DE LAS PERSONAS TITULARES Y SU EJERCICIO CAPÍTULO I

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Artículo 33. En todo momento la persona titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

Artículo 34. El derecho de acceso consiste en que la persona titular podrá acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.

Artículo 35. El derecho de rectificación consiste en que la persona titular podrá solicitar al responsable la corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

Artículo 36. El derecho de cancelación consiste en que la persona titular tendrá derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Artículo 37. El derecho de oposición consiste en que la persona titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia le cause un daño o perjuicio; y

- I. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales de la misma o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

Artículo 38. Los datos personales sólo podrán ser proporcionados a su titular, a su representante legal, a la autoridad judicial que funde y motive su solicitud, o a terceros en los términos de la presente Ley.

CAPÍTULO II

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Artículo 39. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 40. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad de la persona titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal o, en su caso, por mandato judicial.

En el ejercicio de los derechos ARCO de personas niñas, niños y adolescentes o que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma legislación.

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que la persona titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

Puede alegar interés jurídico, de manera enunciativa mas no limitativa, el albacea, herederos, legatarios, familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento delegatorio, pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos testigos.

En el supuesto de que la persona titular sea niña, niño o adolescentes, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción, el acta de nacimiento o identificación según corresponda, así como la identificación de quien ejercía la patria potestad y/o tutela.

En el supuesto de que la persona titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, el interés jurídico se acreditará con la copia de su acta de defunción, el documento de su identificación oficial y de quien ejercía la tutela, así como el instrumento legal de designación del tutor.

Artículo 41. El ejercicio de los derechos ARCO es gratuito. Solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable.

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.

Cuando la persona titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a ésta.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la persona titular.

El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo a la persona titular.

Artículo 42. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando se le notifique a la persona titular dentro del plazo de respuesta.

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta a la persona titular.

Artículo 43. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:

- I. El nombre de la persona titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
- II. Los documentos que acrediten la identidad de la persona titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;
- III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la solicitud;
- IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
- V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita la persona titular; y
- VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, la persona titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud

en la modalidad requerida por la persona titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.

En caso de que la solicitud de derechos ARCO no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se prevendrá a la persona titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los responsables, para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

Con relación a una solicitud de cancelación, la persona titular deberá señalar las causas que la motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del responsable.

En el caso de la solicitud de oposición, la persona titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que la llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento o, en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable competente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezcan las Autoridades garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Unidad de Transparencia deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.

Las Autoridades Garantes, según su ámbito de competencia, podrán establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar a las personas titulares el ejercicio de los derechos ARCO.

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible considerando el perfil de las personas titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el responsable.

Artículo 44. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento de la persona titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable competente.

En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento a la persona titular.

Artículo 45. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar a la persona titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo.

Artículo 46. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no serán procedente son:

- I. Cuando la persona titular o su representante no estén debidamente acreditadas para ello;
- II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;
- III. Cuando exista un impedimento legal;
- IV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
- V. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
- VI. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;
- VII. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;
- VIII. Cuando el responsable no sea competente;
- IX. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados de la persona titular;
- X. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por la persona titular;

XI. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, o

XII. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar a la persona titular el motivo de su determinación, en el plazo de hasta veinte días a los que se refiere el primer párrafo del artículo 46 de la presente Ley, y por el mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.

Artículo 47. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la presente Ley.

CAPÍTULO III

Portabilidad de los Datos

Artículo 48. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, la persona titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.

Cuando la persona titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.

TÍTULO CUARTO

RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y LA PERSONA ENCARGADA

CAPÍTULO ÚNICO

Responsable y Persona Encargada

Artículo 49. La persona encargada deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable.

Artículo 50. La relación entre el responsable y la persona encargada deberá estar formalizada mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.

En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste la persona encargada:

I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable;

II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable;

III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;

IV. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones;

V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;

VI. Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos personales; y

VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad competente.

Los acuerdos entre el responsable y la persona encargada relacionados con el tratamiento de datos personales no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo establecido en el aviso de privacidad correspondiente.

Artículo 51. Cuando la persona encargada incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí misma sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable y las consecuencias legales correspondientes conforme a la legislación en la materia que le resulte aplicable.

Artículo 52. La persona encargada podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando medie la autorización expresa de este último, en este caso, la persona subcontratada asumirá el carácter de persona encargada en los términos de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya formalizado la relación entre el responsable y la persona encargada, prevea que esta última pueda llevar a cabo a su vez las subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el párrafo anterior se entenderá como otorgada a través de lo estipulado en estos.

Artículo 53. Una vez obtenida la autorización expresa del responsable, la persona encargada deberá formalizar la relación adquirida con la persona subcontratada a través de un contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable, y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la prestación del servicio en términos de lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 54. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube, y otras materias que impliquen el tratamiento de datos personales, siempre y cuando la persona proveedora externa garantice políticas de protección de datos personales equivalentes a los principios y deberes establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales por parte de la persona proveedora externa a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos.

Artículo 55. Para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube y otras materias, en los que el responsable se adhiera a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de contratación, solo podrá utilizar aquellos servicios en los que la persona proveedora:

I. Cumpla, al menos, con lo siguiente:

a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y deberes que correspondan conforme a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el servicio;

c) Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el servicio;

d) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se preste el servicio;

I. Cuenten con mecanismos, al menos, para:

a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta;

b) Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los que se presta el servicio;

c) Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales sobre los que se preste el servicio;

d) Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido el servicio prestado al responsable y que este último haya podido recuperarlos; y

e) Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al responsable.

En cualquier caso, el responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida protección de los datos personales, conforme a la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

TÍTULO QUINTO COMUNICACIONES DE DATOS PERSONALES Capítulo Único

Transferencias y Remisiones de Datos Personales

Artículo 56. Toda transferencia de datos personales, sea esta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de la persona titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 16, 61 y 65 de esta Ley.

Artículo 57. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en los siguientes casos:

I. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos, o

II. Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean homólogas o las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente.

Artículo 58. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales deberá tratar los datos personales, comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizará para los fines que fueron transferidos atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable transferente.

Artículo 59. El responsable sólo podrá transferir o hacer remisión de datos personales fuera del territorio nacional cuando el tercero receptor o la persona encargada se obligue a proteger los datos personales conforme a los principios y deberes que establece la presente Ley y las disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 60. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor de los datos personales el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente a la persona titular.

Artículo 61. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento de la persona titular, en los siguientes supuestos:

I. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte;

II. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;

III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;

IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última;

V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y la persona titular;

VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés de la persona titular, por el responsable y un tercero;

VIII. Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento y transferencia de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley, o

IX. Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad.

La actualización de algunas de las excepciones previstas en este artículo no exime al responsable de cumplir con las obligaciones que resulten aplicables previstas en el presente capítulo.

Artículo 62. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales que se realicen entre el responsable y la persona encargada no requerirán ser informadas a la persona titular, ni contar con su consentimiento.

TÍTULO SEXTO

ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO I

Mejores prácticas

Artículo 63. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, el responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

I. Elevar el nivel de protección de los datos personales;

II. Armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico;

III. Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de las personas titulares;

IV. Facilitar las transferencias de datos personales;

V. Complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales; y

VI. Demostrar ante las Autoridades Garantes, el cumplimiento de la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales.

Artículo 64. Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o reconocimiento por parte de las Autoridades Garantes deberá:

I. Cumplir con los criterios y parámetros que para tal efecto emita la Autoridad Garante que corresponda según su ámbito de competencia, y

II. Ser notificado ante las Autoridades Garantes de conformidad con el procedimiento establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que sean evaluados y, en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que refiere el último párrafo de este artículo.

Las Autoridades Garantes, según su ámbito de competencia, deberán emitir las reglas de operación de los registros en los que se inscribirán aquellos esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos. Podrán inscribir los esquemas de mejores prácticas que hayan

reconocido o validado en el registro administrado por la Secretaría, de acuerdo con las reglas que fije esta última.

Artículo 65. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y de conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá realizar una evaluación de impacto en la protección de datos personales, y presentarla ante las Autoridades Garantes, según su ámbito de competencia, las cuales podrán emitir recomendaciones no vinculantes especializadas en la materia de protección de datos personales.

El contenido de la evaluación de impacto en la protección de datos personales deberá determinarse por la Autoridad Garante, en el ámbito de su competencia.

Artículo 66. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando:

- I. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar;
- II. Se traten datos personales sensibles; y
- III. Se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales.

Artículo 67. La Autoridad Garante, en el ámbito de su competencia, podrá emitir criterios adicionales con sustento en parámetros objetivos que determinen que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en función de:

- I. El número de personas titulares;
- II. El público objetivo;
- III. El desarrollo de la tecnología utilizada; y
- IV. La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto social o económico del mismo, o bien, del interés público que se persigue.

Artículo 68. Los sujetos obligados que realicen una evaluación de impacto en la protección de datos personales, deberán presentarla ante las Autoridades Garantes, según su ámbito de competencia, treinta días anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, a efecto de que emitan las recomendaciones no vinculantes correspondientes.

Artículo 69. Las Autoridades Garantes, según su ámbito de competencia, deberán emitir, de ser el caso, recomendaciones no vinculantes sobre la evaluación de impacto en la protección de datos personales presentado por el responsable.

El plazo para la emisión de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior será dentro de los treinta días siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación de la evaluación de impacto en la protección de datos personales.

Artículo 70. Cuando a juicio del sujeto obligado se puedan comprometer los efectos que se pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación de políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales o se trate de situaciones de emergencia o urgencia, no será necesario realizar la evaluación de impacto en la protección de datos personales.

CAPÍTULO II

Bases de datos en posesión de instancias de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia

Artículo 71. La obtención y tratamiento de datos personales, en términos de lo que dispone esta Ley por parte de los sujetos obligados competentes en instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos. Deberán ser almacenados en las bases de datos establecidas para tal efecto.

Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los particulares en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el presente Capítulo.

Artículo 72. En el tratamiento de datos personales, así como en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, que realicen los sujetos obligados competentes de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, deberá cumplir con los principios establecidos en el Título Segundo de la presente Ley.

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial, a petición de la autoridad que faculte la ley o de la persona titular del Ministerio Público correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Artículo 73. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capítulo deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y

confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

TÍTULO SÉPTIMO

RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO I

Comité de Transparencia

Artículo 74. Cada responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos personales.

Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

- I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;
- II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad;
- III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO y de portabilidad;
- IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor observancia de la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;
- V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;
- VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por las Autoridades Garantes, según corresponda;
- VII. Establecer programas de capacitación y actualización para las personas servidoras públicas en materia de protección de datos personales; y
- VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad, respecto de determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que realicen los responsables.

CAPÍTULO II

Unidad de Transparencia

Artículo 76. Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia que se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, que tendrá además las siguientes funciones:

- I. Auxiliar y orientar a la persona titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales;
- II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad;
- III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a la persona titular o su representante debidamente acreditados;
- IV. Informar a la persona titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;
- V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
- VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; y
- VII. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales.

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, deberán designar a un oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte de la Unidad de Transparencia.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de información, en lenguas indígenas, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 77. El responsable procurará que las personas con algún tipo de discapacidad o grupos de atención prioritaria, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales.

TÍTULO OCTAVO AUTORIDADES GARANTES CAPÍTULO I

Autoridades Garantes

Artículo 78. Las Autoridades Garantes tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados;
- II. Interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo;
- III. Conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan las personas titulares, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;
- IV. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación;
- V. Establecer y ejecutar las medidas de apremio previstas en términos de lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
- VI. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la presente Ley y, en su caso, aportar las pruebas con las que cuente;
- VII. Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lengua indígena, sean atendidos en la misma lengua;
- VIII. Garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, condiciones de accesibilidad para que las personas titulares que pertenecen a grupos de atención prioritaria puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales;
- IX. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente Ley;
- X. Proporcionar apoyo técnico a los responsables para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XI. Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las materias reguladas por la presente Ley;
- XII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley;
- XIII. Administrar el registro de esquemas de mejores prácticas a que se refiere la presente Ley y emitir sus reglas de operación;
- XIV. Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la evaluación de impacto en la protección de datos personales que le sean presentadas;
- XV. Emitir disposiciones generales para el desarrollo del procedimiento de verificación;
- XVI. Realizar las evaluaciones correspondientes a los esquemas de mejores prácticas que les sean notificados, a fin de resolver sobre la procedencia de su reconocimiento o validación e inscripción en el registro de esquemas de mejores prácticas, así como promover la adopción de los mismos;
- XVII. Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general para el debido cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que establece la presente Ley, así como para el ejercicio de los derechos de las personas titulares;
- XVIII. Celebrar convenios con los responsables para desarrollar programas que tengan por objeto homologar tratamientos de datos personales en sectores específicos, elevar la protección de los datos personales y realizar cualquier mejora a las prácticas en la materia;
- XIX. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas;
- XX. Diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables respecto al cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
- XXI. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales entre los responsables;
- XXII. Emitir lineamientos generales para el debido tratamiento de los datos personales;
- XXIII. Emitir lineamientos para homologar el ejercicio de los derechos ARCO y portabilidad;
- XXIV. Emitir criterios generales de interpretación para garantizar el derecho a la protección de datos personales;
- XXV. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- XXVI. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales a través de la Plataforma Nacional;
- XXVII. Cooperar con otras autoridades para combatir conductas relacionadas con el tratamiento indebido de datos personales;
- XXVIII. Celebrar convenios con las demás Autoridades Garantes y responsables que coadyuven al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

XXIX. Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la evaluación de impacto en la protección de datos personales que le sean presentadas; y

XXX. Las demás que le confiera la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 79. En la integración, procedimiento de designación y funcionamiento de las Autoridades garantes se estará a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III

Coordinación y Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales

Artículo 80. Las Autoridades Garantes, según corresponda, deberán capacitar y actualizar de forma permanente a todas las personas servidoras públicas que tengan adscritas en materia de protección de datos personales, a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.

Artículo 81. Las Autoridades Garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

- I. Colaborar con instituciones de educación superior y la integración de centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de datos personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con las Autoridades Garantes en sus tareas sustantivas; y

- II. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los responsables.

TÍTULO NOVENO

DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I

Recurso de Revisión

Artículo 82. La persona titular o su representante podrá interponer un recurso de revisión ante las Autoridades Garantes, según corresponda, o bien, ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, a través de los siguientes medios:

- I. Por escrito libre en el domicilio de las Autoridades Garantes o en las Unidades de Transparencia, según corresponda, o en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan;

- II. Por correo certificado con acuse de recibo;

- III. Por formatos que al efecto emitan las Autoridades Garantes, según corresponda;

- IV. Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen, o

- V. Cualquier otro medio que al efecto establezcan las Autoridades Garantes, según corresponda.

Se presumirá, que la persona titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones.

Artículo 83. La persona titular podrá acreditar su identidad a través de cualquiera de los siguientes medios:

- I. Identificación oficial;

- II. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya; o

- III. Mecanismos de autenticación autorizados por las Autoridades Garantes, según corresponda, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

El uso de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación.

Artículo 84. Cuando la persona titular actúe mediante un representante, este deberá acreditar su personalidad en los siguientes términos:

- I. Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o instrumento público, o declaración en comparecencia personal de la persona titular y del representante ante las Autoridades garantes, y

- II. Si se trata de una persona moral, mediante instrumento público.

Artículo 85. La interposición del recurso de revisión relacionado con datos personales de personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite un interés jurídico o legítimo.

Artículo 86. En la sustanciación de los recursos de revisión, las notificaciones que emitan las Autoridades Garantes surtirán efectos el mismo día en que se practiquen.

Las notificaciones podrán efectuarse:

- I. Personalmente en los siguientes casos:

- a) Se trate de la primera notificación;

- b) Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;

- c) Se trate de la solicitud de informes o documentos;

- d) Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate; y
- e) En los demás casos que disponga la ley.

II. Por correo certificado, con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados por las Autoridades Garantes, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial, cuando se trate de requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones que puedan ser impugnadas;

III. Por correo postal ordinario o por correo electrónico ordinario cuando se trate de actos distintos de los señalados en las fracciones anteriores; o

IV. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su domicilio, se ignore este o el de su representante.

Artículo 87. El cómputo de los plazos señalados en el presente Título comenzará a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.

Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte de las Autoridades Garantes.

Artículo 88. La persona titular, el responsable o cualquier autoridad deberá atender los requerimientos de información en los plazos y términos que las Autoridades Garantes establezcan.

Artículo 89. Cuando la persona titular, el responsable o cualquier autoridad se niegue a atender o cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y documentación, emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por las Autoridades Garantes, según corresponda, o facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas, o entorpezca sus actuaciones, según corresponda, tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún otro momento del procedimiento y las Autoridades garantes, tendrán por ciertos los hechos materia del procedimiento y resolverán con los elementos que dispongan.

Artículo 90. En la sustanciación de los recursos de revisión, las partes podrán ofrecer las siguientes pruebas:

I. La documental pública;

II. La documental privada;

III. La inspección;

IV. La pericial;

V. La testimonial;

VI. La confesional, excepto tratándose de autoridades;

I. Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; y

II. La presuncional legal y humana.

Las Autoridades Garantes podrán allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación aplicable.

Artículo 91. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la presente Ley para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, la persona titular o, en su caso, su representante podrá interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya vencido el plazo para dar respuesta.

Artículo 92. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:

I. Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Se declare la inexistencia de los datos personales;

III. Se declare la incompetencia por el responsable;

IV. Se entreguen datos personales incompletos;

V. Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado;

VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

VIII. Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;

IX. La persona titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales;

X. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la procedencia de los mismos;

XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO; y

XII. En los demás casos que disponga la legislación aplicable.

Artículo 93. Los únicos requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión serán los siguientes:

I. El área responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO;

II. El nombre de la persona titular que recurre o su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;

III. La fecha en que fue notificada la respuesta a la persona titular, o bien, en caso de falta de respuesta la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO;

IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de inconformidad;

V. En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente; y

VI. Los documentos que acrediten la identidad de la persona titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante.

Al recurso de revisión se podrán acompañar las pruebas y demás elementos que considere la persona titular procedentes someter a juicio de las Autoridades Garantes.

En ningún caso será necesario que la persona titular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 94. Una vez admitido el recurso de revisión, las Autoridades Garantes podrán buscar una conciliación entre la persona titular y el responsable.

De llegar a un acuerdo, este se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y las Autoridades garantes deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Artículo 95. Admitido el recurso de revisión y sin perjuicio de lo dispuesto por la presente Ley, las Autoridades Garantes promoverán la conciliación entre las partes, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia.

La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos, electrónicos o por cualquier otro medio que determine, según corresponda. En cualquier caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia.

Quedan exceptuado de la etapa de conciliación, cuando la persona titular sea niña, niño y adolescente y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango y demás disposiciones jurídicas aplicables, salvo que cuente con representación legal debidamente acreditada;

II. Recibida la manifestación de la voluntad de conciliar por ambas partes, las Autoridades Garantes señalarán el lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses entre la persona titular y el responsable, la cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que se reciba la manifestación antes mencionada.

Las Autoridades Garantes en su calidad de conciliadora podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación.

La conciliadora podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, la conciliadora señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes.

De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el resultado de la misma. En caso de que el responsable o la persona titular o sus respectivos representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa;

I. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un plazo de tres días, será convocada a una segunda audiencia de conciliación, en el plazo de cinco días. En caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará con el procedimiento;

II. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de revisión;

III. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y las Autoridades Garantes deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y

IV. El cumplimiento del acuerdo dará por concluida la sustanciación del recurso de revisión, en caso contrario las Autoridades garantes reanudarán el procedimiento.

Artículo 96. Las Autoridades Garantes resolverán el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse hasta por veinte días por una sola vez.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior será suspendido durante el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.

Artículo 97. Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, las Autoridades Garantes deberán aplicar la suplencia de la queja a favor de la persona titular, siempre y cuando no altere el contenido original del recurso de revisión, ni modifique los hechos o peticiones

expuestas en el mismo, así como garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 98. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión la persona titular no cumple con alguno de los requisitos previstos en la presente Ley y las Autoridades Garantes no cuenten con elementos para subsanarlos, estas deberán requerir a la persona titular, por una sola ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito.

La persona titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen las Autoridades Garantes para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

Artículo 99. Las resoluciones de las Autoridades Garantes podrán:

I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión por improcedente;

II. Confirmar la respuesta del responsable;

III. Revocar o modificar la respuesta del responsable, o

IV. Ordenar la entrega de los datos personales, en caso de omisión del responsable.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución. Los responsables deberán informar a las Autoridades Garantes el cumplimiento de sus resoluciones.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente pronunciarse sobre la procedencia de los puntos controvertidos de la solicitud de información original.

Cuando las Autoridades Garantes determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 100. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;

II. La persona titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este último;

III. Las Autoridades Garantes hayan resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia del mismo;

IV. No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en la presente Ley;

V. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por la persona recurrente o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante las Autoridades Garantes;

VI. La persona recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos, o

VII. La persona recurrente no acredite interés jurídico.

El desechamiento no implica la preclusión del derecho de la persona titular para interponer ante las Autoridades Garantes un nuevo recurso de revisión.

Artículo 101. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído cuando:

I. La persona recurrente se desista expresamente;

II. La persona recurrente fallezca;

III. Una vez admitido se actualice alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley;

IV. El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el mismo quede sin materia, o

V. Cuando el recurso quede sin materia.

Artículo 102. Las Autoridades Garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, en versión pública, a más tardar al tercer día siguiente de su emisión.

Artículo 103. Las resoluciones de las Autoridades Garantes serán vinculantes, definitivas e inatacables para los responsables.

Artículo 104. Las personas titulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de las Autoridades Garantes ante los jueces y tribunales especializados en materia de protección de datos personales establecidos por el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo.

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TÍTULO NOVENO
FACULTAD DE VERIFICACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
Procedimiento de Verificación

Artículo 105. Las Autoridades Garantes tendrán la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás disposiciones que se deriven de ésta. En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal de las Autoridades Garantes estará obligadas a guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en virtud de la verificación correspondiente.

El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de una verificación o a sus bases de datos personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.

Artículo 106. La verificación podrá iniciarse:

I. De oficio cuando las Autoridades Garantes cuenten con indicios que hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, o

II. Por denuncia de la persona titular cuando considere que ha sido afectada por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables o, en su caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia.

El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a partir del día siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma. Cuando los hechos u omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar a partir del día hábil siguiente al último hecho realizado.

La verificación no procederá y no se admitirá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión previstos en la presente Ley.

Previo a la verificación respectiva, las Autoridades Garantes podrán desarrollar investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.

Artículo 107. Para la presentación de una denuncia no podrán solicitarse mayores requisitos que los que a continuación se describen:

I. El nombre de la persona que denuncia o, en su caso, de su representante;

II. El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia;

III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho;

IV. El responsable denunciado y su domicilio o, en su caso, los datos para su identificación y/o ubicación, y

V. La firma de la persona denunciante o, en su caso, de su representante. En caso de no saber firmar, bastará la huella digital.

La denuncia podrá presentarse por escrito libre o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezcan las Autoridades garantes, según corresponda.

Una vez recibida la denuncia, las Autoridades garantes deberán acusar recibo de la misma. El acuerdo correspondiente se notificará a la persona denunciante.

Artículo 108. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la procedencia de la actuación por parte de las Autoridades Garantes, la cual tiene por objeto requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.

Para la verificación en instancias de seguridad pública estatal y municipal, se requerirá en la resolución una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los fines establecidos en el artículo 115 de la presente Ley.

El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días.

Las Autoridades Garantes podrán ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de bases de datos de los sujetos obligados.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta entonces los sujetos obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por las Autoridades Garantes.

Artículo 109. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emitan las Autoridades garantes, en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la misma determine.

Artículo 110. Los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías por parte de las Autoridades Garantes que tengan por objeto verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles implementados por el responsable, identificar sus deficiencias, así como proponer acciones correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en su caso correspondan.

CAPÍTULO II DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Artículo 111. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas con motivo de los recursos que se sometan a su competencia, las Autoridades Garantes podrán emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en los mismos.

Asimismo, la Autoridad Garante podrá emitir criterios de carácter orientador para las demás Autoridades Garantes que, se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, derivados de resoluciones que hayan causado estado.

Artículo 112. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

Todo criterio que emitan las Autoridades Garantes deberá contener una clave de control para su debida identificación.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO MEDIDAS DE APREMIO Y RESPONSABILIDADES CAPÍTULO I

Medidas de Apremio

Artículo 113. Para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las Autoridades Garantes, se deberá observar lo dispuesto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Transparencia.

Artículo 114. Las Autoridades Garantes podrán imponer las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

I. La amonestación pública; o

II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de las Autoridades garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstas. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en la presente Ley, deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 115. Si, a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas no se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la misma lo obligue a cumplir sin demora.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas.

Artículo 116. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo deberán ser determinadas por las Autoridades garantes, por sí mismas o con el apoyo de la autoridad competente.

Artículo 117. Las multas que fijen las Autoridades Garantes se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas y de Administración, a través de los procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 118. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo, las Autoridades garantes deberán considerar:

I. La gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales como el daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades Garantes, y la afectación al ejercicio de sus atribuciones;

II. La condición económica de la persona infractora; y

III. La reincidencia.

Las Autoridades Garantes establecerán mediante lineamientos de carácter general, las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia a sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.

Artículo 119. En caso de reincidencia las Autoridades garantes podrán imponer una multa equivalente de hasta el doble.

Se considerará reincidente a quien habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Artículo 120. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la misma a la persona infractora.

Artículo 121. La amonestación pública será impuesta por las Autoridades Garantes y será ejecutada por el superior jerárquico inmediato de la persona infractora.

Artículo 122. Las Autoridades Garantes podrán requerir a la persona infractora la información necesaria para determinar su condición económica, apercibida de que, en caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base en los elementos que se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de información o sus propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie

su condición, quedando facultadas las Autoridades Garantes para requerir aquella documentación que se considere indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.

Artículo 123. En contra de la imposición de medidas de apremio procede el recurso correspondiente ante los jueces y tribunales especializados en materia de datos personales establecidos por el Poder Judicial de la Federación.

CAPÍTULO II

Causas de Responsabilidad

Artículo 124. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:

- I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
- II. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate;
- III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
- IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;
- V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que refiere el artículo 21 de la presente Ley, según sea el caso, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;
- VI. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los datos personales;
- VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 36 de la presente Ley;
- VIII. No establecer las medidas de seguridad en términos de lo previsto de la presente Ley;
- IX. Presentar vulnerabilidades en los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad de conformidad con los artículos 25, 26 y 27 de la presente Ley;
- X. Llevar a cabo la transferencia de datos personales en contravención a lo previsto en la presente Ley;
- XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad;
- XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por la presente Ley;
- XIII. No acatar las resoluciones emitidas por las Autoridades Garantes; y
- XIV. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se Ley de Transparencia vigente, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 125. Para las conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Artículo 126. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Dichas responsabilidades se determinarán en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, las Autoridades Garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 127. Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, la Autoridad Garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, la Autoridad Garante competente deberá dar vista al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado correspondiente con el fin de que instrumente los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 128. En aquellos casos en que la persona presunta infractora tenga la calidad de persona servidora pública, la Autoridad Garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente que contenga todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

Artículo 129. La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción a la Autoridad Garante, según corresponda.

A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, la Autoridad Garante que corresponda deberá elaborar lo siguiente:

I. Denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control o equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible responsabilidad; y

II. Expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad, y que acrediten el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas.

La denuncia y el expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de control o equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que la Autoridad Garante correspondiente tenga conocimiento de los hechos.

La Autoridad Garante deberá denunciar el incumplimiento de las determinaciones que ésta emita y que impliquen la presunta comisión de un delito ante la autoridad competente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango publicada en el periódico oficial no. 97 de fecha 05 de diciembre de 2013. Decreto 514, LXV Legislatura.

TERCERO. Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Durango publicada en el periódico oficial no. 47 de fecha 11 de junio de 2017. Decreto 149, LXVI legislatura.

CUARTO. Los municipios con población mayor a 70,000 habitantes fungirán como Autoridades garantes, a través de sus Órganos Internos de Control o equivalentes, de conformidad con lo señalado en la presente Ley.

Para el caso del resto de los municipios será la Secretaría de Contraloría del Estado la Autoridad garante quien revisará las actuaciones en materia de protección de datos personales.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumplimiento con las obligaciones de información que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanen de esta, en los plazos, términos y condiciones previstos en dicha Ley y en las disposiciones referidas.

QUINTO. Las Autoridades Garantes deberá expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos y demás disposiciones aplicables, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de armonizarlos a lo previsto en el mismo.

SEXTO. El órgano de control y disciplina del Poder Judicial, del Poder Legislativo, los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto deberán realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna para dar cumplimiento a lo dispuesto en este instrumento.

Para efectos de lo previsto en este transitorio, se suspenden por un plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación, establecidos en este instrumento y demás normativa aplicable, con excepción de la recepción y atención de las solicitudes de información que se tramitan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por las autoridades que se mencionan en el párrafo anterior.

SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman la fracción IX del artículo 19º, la fracción XL del artículo 21º, las fracciones VII y XXII al artículo 22º y se reforma el artículo 28º todos a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, para quedar como sigue:

Artículo 19.-

De la fracción I a la VIII.

IX. Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

De las fracciones X a la XIV.

Artículo 21.-

De las fracciones I a la XXXIX.

XL. Elaborar e implementar programas de mejoramiento administrativo, en coordinación con la **Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental**, con el objeto de eficientar y simplificar las funciones de las dependencias de la administración pública;

De las fracciones XLI a la LXXXVIII.

Artículo 22.-

De las fracciones I a la VI.

VII. De acuerdo a las leyes federal y estatal **en materia** de obras públicas y en coordinación con la **Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental**, expedir las bases a que deberán sujetarse los concursos para la realización de obras en la entidad, debiendo informar a los participantes de los resultados de los mismos, así como vigilar el cumplimiento de los contratos celebrados;

De la fracción VIII a la XXI.

XXII. Proyectar las normas relativas para el mejor uso, explotación y aprovechamiento de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado, elaborar y mantener al corriente el avalúo de dichos bienes y reunir, revisar y determinar las normas y procedimientos para realizarlo con la **Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental**;

De la fracción XXIII a la XXV.

Artículo 28.- A la **Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental**, le compete el despacho de los siguientes asuntos:

I. **Elaborar y conducir la política pública en materia de integridad, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, , transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización: y acciones de prevención de la corrupción;**

II. **Promover los mecanismos de coordinación necesarios con los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Local de Fiscalización para el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la auditoría y fiscalización de los recursos públicos, así como para la ejecución de acciones en los rubros relacionados con el ejercicio de los mismos; y la formulación de propuestas que mejoren la eficacia en las acciones de prevención de hechos de corrupción, faltas administrativas y el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental;**

III. **Emitir las normas en el ámbito de su competencia que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la administración pública estatal, conforme a las mejores prácticas en materia de contrataciones y obras públicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;**

IV. **Emitir exhortos, recomendaciones y apercibimientos a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, para el adecuado desempeño de sus funciones;**

V. **Emitir, en el ámbito de su competencia, las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en materia de investigación, fiscalización y auditorías internas, transversales o externas, incluida la fiscalización o auditorías de gabinete y electrónicas o cualquier otro tipo de revisiones, así como realizar las investigaciones, actos de fiscalización o auditorías que se requieran;**

VI. **Auditar, revisar, supervisar y evaluar el ejercicio del gasto público de la administración pública estatal y su congruencia con el presupuesto de egresos;**

VII. **Auditar, revisar, supervisar y evaluar técnica y financieramente los recursos federales ejercidos por las dependencias, órganos y entidades, derivados de los acuerdos o convenios suscritos con los órganos de fiscalización y control federales;**

VIII. Vigilar y dar seguimiento a la ejecución de los programas federales, en las dependencias y entidades, para verificar la pertinencia y efectividad de la actuación gubernamental, enfatizando el rol detectivo, preventivo y correctivo que permita focalizar e inhibir actos de corrupción;

IX. Establecer, regular y emitir los plazos y términos para solventar auditorías o aquellos que dentro de su ámbito de competencia no se encuentren regulados por otras disposiciones legales; así como solicitar cualquier tipo de información a las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal, para tal propósito;

X. Establecer los esquemas de vigilancia y control preventivo, definiendo los mecanismos de interrelación entre los diferentes instrumentos de control, tales como los órganos internos de control y las auditorías externas;

XI. Ejercer las facultades de coordinación control, evaluación y auditoría gubernamental, en forma directa o a través de los órganos internos de las dependencias y entidades a la que se encuentren designados; así como en materia de responsabilidades administrativas, aplicar lo dispuesto por la legislación y normatividad correspondiente, e impulsar la participación ciudadana y la cultura cívica y ética;

XII. Establecer los mecanismos necesarios que prevengan actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas e impulsar la participación ciudadana y la cultura cívica y ética que contribuya a la mejora continua;

XIII. Organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluar la gestión gubernamental y sus resultados, para efectos correctivos y preventivos, así como concertar con las dependencias, y entidades, los indicadores para dicha evaluación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Evaluar el sistema de control interno institucional y proponer las medidas que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales;

XV. Vigilar directamente o a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, presupuesto, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública estatal, así como lo dispuesto para los procesos de entrega-recepción;

XVI. Promover y apoyar a los ayuntamientos de la entidad, para la implementación y funcionamiento de sus órganos de control municipales;

XVII. Intervenir en las ventas, remates y donaciones de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, con base en las disposiciones normativas aplicables;

XVIII. Elaborar el programa anual de fiscalización orientado a promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad en la gestión pública.

XIX. Operar el sistema estatal de inconformidades, quejas y denuncias, promoviendo la participación ciudadana para que exponga las quejas, denuncias e inconformidades que se deriven de las irregularidades de la actuación del servidor público, así como las deficiencias que detecte en el servicio público;

XX. Conocer y resolver las inconformidades y recursos presentados por los particulares con motivo de cualquier acto de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las Leyes correspondientes en materia de obras públicas y de adquisiciones;

XXI. Promover en las dependencias y entidades mecanismos de participación ciudadana, en los programas de desarrollo social y obras públicas;

XXII. Vigilar que las dependencias y entidades rindan los informes y remitan la información correspondiente a los órganos de fiscalización y control competentes, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

XXIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas, adquiridas con el Poder Ejecutivo, solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen, y en su caso determinar las deductivas, sanciones y revocaciones, así como promover las responsabilidades que en su caso procedan, conforme a la normatividad aplicable.

XXIV. Opinar, sobre los proyectos de normas de contabilidad gubernamental, control presupuestal, programación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, de austeridad, contratación de deuda o manejo de fondos y valores, que formulen las dependencias y entidades competentes, así como, sobre las iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos jurídicos que correspondan al ámbito de su competencia. Asimismo, con respecto a la normatividad que expidan las dependencias y entidades competentes para regular las adquisiciones arrendamiento de bienes y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XXV. Designar a las y los prestadores de servicios profesionales de auditorías externas gubernamentales de las dependencias y entidades, así como normar y vigilar su desempeño;

XXVI. Designar y remover a los comisarios públicos y sus suplentes, en los órganos de gobierno o de vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal, así como los titulares de las unidades de control interno, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental;

XXVII. Ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones;

XXVIII. Formular y conducir la política de la administración pública estatal para establecer medidas que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere y la protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXIX. Establecer las políticas, bases y normativa para la determinación de la información con sentido social que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se deba difundir;

XXX. Promover y consolidar los principios de la transparencia y acceso a la información pública, y los mecanismos de participación ciudadana evaluación de la gestión pública;

XXXI. Garantizar en el ámbito de su competencia el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Conforme a los principios y bases establecidos en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango;

XXXII. Promover la correcta aplicación de las leyes, normas y políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia con sentido social y apertura institucional y datos abiertos;

XXXIII. Conformar y presidir el Subsistema de Transparencia del Estado de Durango y garantizar el correcto funcionamiento del mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango;

XXXIV. Solicitar información a los integrantes del Comité del Subsistema de Transparencia a fin de conformar los informes correspondientes al Consejo Nacional;

XXXV. Coordinarse con el Consejo Nacional y otras Autoridades Garantes para la implantación de políticas nacionales y el intercambio de mejores prácticas;

XXXVI. Proponer la interposición de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales que vulneren el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales;

XXXVII. Emitir y difundir el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la gestión pública, así como promover en el sector privado directrices para la emisión de sus Códigos de Ética y modelos de declaración de integridad;

XXXVIII. Impulsar la transparencia y la publicación de datos en formatos accesibles a la ciudadanía; promoviendo la aplicación de las políticas de datos abiertos en la administración pública estatal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXXIX. Vigilar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades, así como las normas para que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y los procedimientos técnicos sean aplicados con criterios de eficacia, eficiencia, economía, honestidad, transparencia y legalidad;

XL. Impulsar la integridad de las personas servidoras públicas, así como diseñar y aplicar los programas de capacitación que promuevan la transparencia, rendición de cuentas y la mejora de la gestión pública;

XLI. Emitir opiniones sobre la política, normas y criterios, en materia de planeación y administración de recursos humanos para la contratación de las personas servidoras públicas, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de conformidad con las normas de control de gasto en materia de servicios personales y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XLII. Promover la formación cívica y la participación ciudadana en materia de anticorrupción y buen gobierno;

XLIII. Impulsar y promover acciones de contraloría social con la participación de los sectores social y privado en la prevención y combate a la corrupción, mejora de la gestión pública y, en su caso, celebrar los convenios correspondientes;

XLIV. Intervenir, en el ámbito de su competencia en los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XLV. Promover las políticas de coordinación que implemente el Sistema Estatal Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la administración pública estatal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XLVI. Vigilar el cumplimiento de la política de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Durango y sus Municipios, y hacer recomendaciones con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las leyes mencionadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XLVII. Acceder en el ámbito de su competencia, a la información, documentación, datos e imágenes, registros y demás relacionadas en poder de la administración pública estatal que contribuyan con las investigaciones y actos de fiscalización;

XLVIII. Celebrar convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos con instituciones públicas y privadas de los tres niveles de gobierno;

XLIX. Nombrar y remover libremente a las personas titulares de los Órganos Internos de Control, así como al demás personal en los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, los cuales dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Los Órganos Internos de Control de las dependencias atenderán los asuntos de sus Órganos Desconcentrados;

L. Conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la administración pública estatal que puedan constituir responsabilidades, así como substanciar los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; aplicar las sanciones por faltas administrativas no graves y, cuando se trate de faltas administrativas graves, remitir el expediente respectivo ante los Tribunales correspondientes, así como presentar las denuncias por actos u omisiones presumiblemente constitutivas de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango y Tortura y demás autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

LI. Sancionar el proceso de entrega-recepción de las dependencias, entidades, en los términos de la legislación y normatividad respectivas; así como llevar registro de las actas de entrega-recepción, y de las sanciones administrativas que se deriven de las mismas;

LII. Recibir, y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables;

LIII. Aplicar las sanciones procedentes por el incumplimiento en la presentación extemporánea de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, inicial, modificación o de conclusión de encargo. De igual manera, llevar registro de la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas; y

LIV. Las demás que se prevean en otras disposiciones y las que le sean encomendadas por la persona titular del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Dentro del plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo del Estado expedirá las adecuaciones y reformas necesarias a la reglamentación aplicable en la materia.

ARTICULO CUARTO. En toda normativa, reglamento y demás instrumentos jurídicos en los que se haga referencia a la Secretaría de la Contraloría, se entenderá que dicha mención corresponde a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SÉGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Atentamente

Victoria de Durango, Dgo. a 12 de agosto de 2025.

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ

DIP. VERONICA GONZALEZ OLGUIN

DIP. GABRIELA VAZQUEZ CHACON

DIP. MAYRA RODRIGUEZ RAMIREZ

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO

Presidenta: Y se le concede para ello la voz a la Diputada Gabriela Vázquez Chacón hasta por 10 minutos, adelante Diputada.

Diputada Gabriela Vázquez Chacón: Hola, muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados con permiso de la mesa directiva. En el corazón de toda democracia moderna late un principio irrenunciable, el derecho de la ciudadanía a saber, a participar y a decidir con información veraz y accesible. La transparencia y la protección de los datos personales no son concesiones del poder público, sino derechos fundamentales que dignifican a las personas, fortalecen las instituciones y consolidan la confianza entre sociedad y gobierno. México ha avanzado en el reconocimiento constitucional de estos derechos, respaldado por tratados internacionales. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de un retroceso de los mecanismos de acceso a la información y vigilancia institucional. En este contexto, el estado de Durango tiene la oportunidad histórica de reafirmar su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la defensa de la privacidad ciudadana. Por ello, presentamos iniciativas que responden a esta necesidad urgente. La nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Durango, la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como modificaciones a la ley orgánica de la administración pública de nuestra entidad. Estas propuestas buscan no solo llenar vacíos normativos, sino transformar la relación entre gobierno y ciudadanía, haciéndola más horizontal, ética y

democrática. La ley de transparencia propone una estructura moderna, compuesta por más de 100 artículos distribuidos en ocho títulos temáticos, su objetivo es garantizar que el acceso a la información pública sea ágil, proactiva y efectiva, se simplifican procedimientos y se precisan las obligaciones de los sujetos obligados. Además, establecerán las sanciones claras para quienes incumplan y se promueve la participación ciudadana y la funcionalidad de plataformas digitales abiertas. Esta ley no solo armoniza nuestro marco legal con estándares internacionales, sino que los fortalece desde una perspectiva local, reconociendo las particularidades de Durango y la necesidad de construir instituciones confiables, abiertas y responsables. Es una herramienta para empoderar a las ciudadanas y ciudadanos, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de la gestión pública. Por otro lado, la ley de protección de datos personales responde al desafío de una sociedad cada vez más digitalizada, donde la privacidad está en riesgo constante. Esta iniciativa propone una regulación integral del tratamiento de datos personales por parte de entidades públicas conforme a principios como licitud, consentimiento, seguridad y proporcionalidad. Se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos accesibles y eficaces. La ley también asigna atribuciones específicas para vigilar el cumplimiento, atender solicitudes ciudadanas y aplicar sanciones, así como reforzar la protección de datos sensibles, biométricos y de menores de edad bajo un enfoque de derechos humanos. Ambas iniciativas reflejan una visión clara, el poder público debe estar al servicio de la ciudadanía. En un entorno adverso a nivel nacional, Durango puede demostrar que es posible construir instituciones que respeten la dignidad humana, promuevan la legalidad y respondan con eficacia a los desafíos del presente. Estas propuestas no sólo son reformas legales, son declaraciones de principios, son una apuesta por un futuro más justo,

informado y participativo, porque la transparencia no es un lujo y la protección de datos no es una opción, son derechos que debemos defender con firmeza y convicción. Por lo manifestado, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone para nuestra entidad la entrada en vigencia de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, así como la nueva ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, además de reformas y adiciones a la ley de administración pública del estado de Durango. La transparencia, el acceso a la información que se genera mediante el ejercicio del poder público, así como la salvaguarda de los datos personales de las y los duranguenses no son una concesión ni una dádiva, sino que constituyen prerrogativas que deben ser garantizadas por la ley de forma efectiva, es cuánto Presidenta.

Presidenta: Muchas gracias, Diputada Gabriela Vázquez y esta iniciativa se turna a las Comisiones de Transparencia y Acceso A La Información y a la Comisión de Administración Pública respectivamente.

6.- Agenda Política:

Presidenta: Entramos al tema de agenda política y se le concede el uso de la palabra al Diputado Ernesto Abel Alanís Herrera, hasta por 10 minutos, para el desahogo de su pronunciamiento denominado "Acontecer", adelante Diputado.

Diputado Ernesto Abel Alanís Herrera: Gracias, Diputada Presidenta, con el permiso de esta comisión permanente, saludo a todos los Diputados que el día de hoy también acompañamos a esta comisión. Santiago Papasquiario es uno de los municipios de mucha historia para nuestro estado, una historia de lucha, esfuerzo y trabajo, un pasado rico desde sus orígenes prehispánicos como

territorio tepehuano, avanzando por una importante época colonial hasta su desarrollo actual, donde ahora es un municipio con una fuerte tradición y una identidad cultural propia. Es un municipio que durante décadas fue resiliente, que abrazó promesas y alimentó esperanzas, que nutrió sus sueños de mejorar su salud y calidad de vida, pero que sin descanso trabajó para alcanzarlos. El inicio de obra de lo que será el nuevo hospital general de esa ciudad es una respuesta concreta y directa a ese añejo reclamo y demanda de las familias, pero que también representa el cumplimiento de la palabra empeñada de un gobernante que desde su campaña electoral se comprometió a gestionarla y hacerla realidad. El viernes 8 de agosto será una fecha que se registrará en la vida de los santiagueros y de los municipios cercanos, y lo será aún más cuando, mediante la inversión de 400 millones de pesos, esta obra sea concluida. Por detrás de esa fecha hay momentos tangibles que vale la pena recordar. El Gobernador Esteban Villegas, siendo Secretario de Salud en la Administración 2010-2016, visualizó y adoptó el compromiso de hacer realidad los sueños de miles de familias de esa región. Y en campaña, en 2022, como candidato, Esteban acudió a un encuentro de frente con los santiagueros y así empezó a labrar este nuevo presente. El 31 de octubre de 2023, esta soberanía recibió del titular del Ejecutivo estatal la iniciativa para enajenar a título gratuito los predios donde se habrían de construir esta nueva unidad hospitalaria y el 15 de noviembre del mismo año, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen, lo que define el inicio del renacimiento de los servicios de salud en Santiago Papasquiaro y sus alrededores. Justo a la convicción y el compromiso personal con la salud de los duranguenses, el Gobernador Esteban, carpeta en mano, presentó el proyecto a la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien sensible a esta añeja demanda de los habitantes de esta zona, autorizó el presupuesto que desde el viernes 8 de marzo empieza a cristalizar los anhelos de casi 25 mil habitantes del noroeste de

Durango. Ciertamente ha sido un camino largo, sinuoso, difícil, pero la espera bien ha valido la pena, la combinación de voluntades permite hoy ejercer 400 millones de pesos para ver renacer las expectativas de mayor calidad de vida y salud de más de 24 mil mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niñas y niños de Santiago Papasquiaro que no cuentan con protección de un sistema de seguridad social. La salud es un derecho y lo que por derecho es sagrado no puede ser negociado ni condicionado, ningún ser humano puede ver comprometido su bienestar físico y emocional por brechas económicas, políticas o sociales. Nuestro gobernador rescata ese precepto elemental porque como principio la equidad debe ser más que un término jurídico o aspiración social, la equidad es un argumento fundamental en toda la sociedad que se precie de ser justa y ese es un valor que practica Esteban Villegas desde el inicio de su gestión. Compañeras y compañeros Diputados, el nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro es una obra que sustituye las instalaciones actuales rebasadas en capacidad y en sus condiciones estructurales, será un nosocomio que ofrezca las especialidades troncales o básicas como urgencias, cirugía general, imagenología, anestesiología, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, traumatología y ortopedia. Contará con 30 camas para hospitalización y 17 consultorios de consulta externa para los miles de beneficiarios de los municipios de Canatlán, Nuevo Ideal, Tepehuanes, El Oro, Conecto de Comonfort, Otáez, San Dimas y Guanaceví y por supuesto, Santiago Papasquiaro. Esta es la importancia y trascendencia de este nuevo hospital y va más allá porque no sólo es considerable la inversión de 400 millones de pesos, sino el impacto social que representa. Se trata del bien máspreciado que tenemos los seres humanos, la salud, se trata de la vida de personas que dependen de la atención oportuna y de calidad que se les brinden los servicios de salud. Permitirá reducir las necesidades de traslados extensos, minimizando así los riesgos asociados tanto

por el desplazamiento como por la condición física del paciente. Significa llevar esperanza en estos momentos de dolor y preocupación. Representa dar alivio cuando la enfermedad agobia y el cuerpo se siente, está mal y nubla en ánimo. Será acompañar al paciente y sus familias con empatía y ofrecer tratamientos que no sólo atiendan los síntomas, sino también la dignidad y el bienestar integral de las personas. Por supuesto, nada será posible sin la vocación, compromiso y compasión de nuestro personal de salud. Porque al final, más allá de los tratamientos y del diagnóstico, lo que realmente coadyuva a que una persona sane es la presencia y el amor con que se ejerza cada acto médico. Amigas y amigos, esta obra no nace con la intención de disputar espacios ni protagonismos personales, sino de sumar esfuerzos, de ampliar horizontes y de fortalecer lo que ya existe, no se trata de quiénes la dirigen, sino de para quiénes se construye, para cada paciente que necesita alivio, para cada familia que busca consuelo y para cada profesional que desea ejercer su vocación con dignidad y sentido. Estoy seguro de que cada espacio del Nuevo Hospital General de Santiago Papasquiario será un refugio de esperanza y que cada vida que toque será un acto de amor y de humanidad, por su atención, muchas gracias.

Presidenta: Muchas gracias, Diputado Alanís y pregunto a las y los Diputados ¿si alguien desea hacer uso de la palabra?, ¿con qué objeto, Diputado Herrera?, adelante, Diputado, tiene hasta cinco minutos.

Diputado Héctor Herrera Núñez: Con el permiso de la presidencia, quiero resaltar algunos puntos importantes en esta obra del Hospital de Santiago Papasquiario, quiero poner en el panorama completo de las personas que no conocen cómo está la situación en Santiago Papasquiario, he sido yo muy insistente en que las condiciones de salud de la región noreste tienen mucho que desear. El hospital

actual, el Hospital Regional Santiago Papasquiario, es un hospital que tiene 35 años de construido, que está construido al lado de un arroyo que en muchas ocasiones se ha inundado, que las paredes en varias partes del hospital se están cayendo, que los muebles son viejos, que el equipamiento que tiene el hospital es viejo. Hemos dado varios recorridos en el hospital, hemos tenido varias reuniones con el personal del hospital, así como con los directores, digo los directores porque hace unos pocos días hubo cambio en la dirección del Hospital de Santiago, que en lo personal lo aplaudo porque había carencias en su gestión, había muchos conflictos ahí con el personal y creo que eso le da un nuevo aire al Hospital de Santiago. Entonces, para poner en contexto, urgía la construcción de un nuevo hospital en Santiago Papasquiario, que no es el Hospital de Santiago Papasquiario, es el hospital de la región noreste, es el hospital de la zona sierra de Durango, que son el municipio de Otáez, Canelas, Topia, Tepehuanes, Guanaceví, el mismo Santiago Papasquiario, que Santiago Papasquiario no sólo es la cabecera municipal, son las comunidades, que algunas comunidades se hacen ocho horas para llegar a la cabecera municipal de Santiago Papasquiario, y también los municipios de Nuevo Ideal y Canatlán, que a pesar de estar más cerca de Durango, en muchas ocasiones prefieren trasladarse a Santiago Papasquiario a recibir atención médica. Entonces, en lo personal aplaudo esta obra, hemos estado también en la gestión, estuvimos insistiendo con el Secretario de Salud, el Gobierno del Estado, también en las reuniones que hemos tenido en México, hemos alzado la voz por este hospital, en su propia mano le entregamos también oficio a la Doctora Claudia en su visita aquí a Mezquital, porque es una obra que realmente urge, y sabemos que es una obra que el gobierno del estado pues requiere el apoyo del Gobierno Federal, aplaudimos también que haya esa coordinación con la Doctora Claudia, 400 millones de pesos es una obra pues muy costosa, que se requiere que haya el

acompañamiento, afortunadamente, como comenta el Diputado Alanís, pues hubo esa sensibilidad de parte de la Doctora Claudia de entrarle a un proyecto tan importante, y como mencionó también el gobernador en su discurso en Santiago Papasquiario, pues no sirve de mucho la construcción de un hospital, de un edificio, que a lo mejor es lo más fácil, lo complicado es el mantenimiento, es el personal que ahí laborará, y que también se está contemplando que se cuente con el personal suficiente, así como también la colaboración del gobierno federal para que tenga los insumos suficientes. Si el hospital de Santiago Papasquiario, además el actual, además de las carencias en infraestructura, pues ahorita está la carencia en el tema de médicos, enfermeras, personal administrativo, que esperemos que el hospital nuevo pues vaya acompañado de nuevas plazas, de nuevas condiciones laborales, porque muchos especialistas no se quieren ir a Santiago Papasquiario, porque es una ciudad más pequeña, que no tiene los lujos que pudiera tener una ciudad más grande como Durango, y que pues tiene que haber un incentivo adicional para poderse mudar a aquella ciudad, y que pudieran tener mejores prestaciones, mejores sueldos, y mejores condiciones en general para que se cuente con todos los especialistas. También hemos alzado la voz de que es importante que se cuente con un área de hemodinamia, o que se pueda prestar el servicio de hemodiálisis para las personas que tienen insuficiencia renal, que de varias comunidades de los municipios alejados pues tienen que trasladarse hasta la capital, y como sabemos una persona que sufre de insuficiencia renal está débil, no tiene esa energía para poderse trasladarse, trasladarse cuatro o cinco horas para venir a recibir esa atención, que a veces es cada tercer día, a veces es diario, y el costo en el que ocurren estas familias pues la verdad que no es nada fácil para las familias. Entonces, sí, aplaudimos esa colaboración de la Doctora Claudia, aplaudimos también el que haya ese empuje del Gobernador de crear y de hacer

una obra tan importante para Santiago Papasquiario, pero sí estaremos ahí al pendiente de que la obra pues se haga de buena calidad, se haga en tiempo, porque se hizo el compromiso por parte de la Doctora.

Presidenta: Diputado, discúlpeme, concluya, por favor se acabó todo su tiempo.

Diputado Héctor Herrera Núñez: Estaremos vigilantes de que se construya de calidad y que se concluya en el tiempo de un año ocho meses, como lo anunció el Gobernador y con esto concluyo, Presidenta gracias.

Presidenta: Gracias Diputado, ¿con qué objeto, Diputado Mata?, tiene hasta cinco minutos, Diputado.

Diputado Alberto Alejandro Mata Valadez: Con el permiso de la presidencia, hacemos uso hoy de esta tribuna, uno para sumarnos a pues de una u otra forma a festejar esta inversión en esta muy importante parte, en esta región muy importante de nuestro estado. Y pues, aunque parezca repetitivo, pero otra vez gracias Claudia, gracias a la Doctora nuevamente. Existe obra, existe inversión en este estado, ojalá y podamos conocer, o ante los planteamientos del Diputado Héctor Herrera, pues ampliar los servicios, estas áreas que hacen falta, ojalá y el Gobierno del estado pudiera entrarle con algo. Pero qué bueno que el gobierno federal, que la Doctora Claudia hace esta importante inversión que se viene a sumar a la mayor parte de la inversión que existe en el estado, que es producto del gobierno federal y también creo que es justo e importante hacer un reconocimiento a nuestro amigo y compañero, al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta Legislatura, al Diputado Héctor Herrera, porque nos consta que durante mucho tiempo ha estado de manera muy

insistente, ha estado de manera física, ha estado en gestiones y en verdad creo que es importante reconocer tu gestión, compañero, y que esto también se desprende, pues bueno, no sólo de la voluntad de una sola persona, sino el esfuerzo de muchos, sobre todo la inversión del Gobierno Federal y algunas voluntades, como la de nuestro amigo el Diputado Héctor Herrera, reconocerte tu insistencia, tu tenacidad para que se diera esta obra, es cuánto, Presidenta.

Presidenta: No habiendo más oradores, informo a esta comisión que el punto denominado, el pronunciamiento denominado “Gobierno” se retira de su presentación el día de hoy, así como el pronunciamiento denominado “Seguridad con Humanismo”, por lo cual se le concede el uso de la voz a la Diputada Verónica González Olgún para el desahogo de su pronunciamiento denominado “Contexto”, tiene hasta diez minutos, Diputada.

Diputada Verónica González Olgún: Gracias Diputada, con el permiso de esta comisión permanente, compañeras y compañeros Diputados. En el Partido de Acción Nacional estamos convencidos de que gobernar bien es gobernar para todos, especialmente para quienes más lo necesitan. Desde hace años, los gobiernos emanados del PAN han demostrado con hecho su compromiso con la transparencia, la eficiencia administrativa y, sobre todo, con el bienestar de las familias duranguenses. Este principio se refleja claramente en la administración municipal encabezada por el Presidente Bonifacio Herrera, quien con responsabilidad y visión social ha implementado políticas públicas enfocadas en aliviar la carga económica de los ciudadanos, especialmente en momentos de rezago o dificultad. Un claro ejemplo de esto es la campaña “Ven, ahorra”, una estrategia diseñada desde la Dirección Municipal de Administración y Finanzas que ha permitido a miles de duranguenses ponerse al corriente en sus

obligaciones fiscales sin que ello signifique un golpe a sus bolsillos. El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Durango reconoce y respalda estas acciones del gobierno municipal porque reflejan el espíritu de servicio público, ser facilitadores, no obstáculos para la ciudadanía. Campaña “Ven, ahorra”, resultados que se traducen en bienestar. La campaña “Ven, ahorra”, no solo es un programa de descuentos, es una política fiscal con rostro humano, ha permitido que más de siete mil cuentas catastrales hayan sido regularizadas, representando un alivio económico directo para las familias que enfrentaban a deudos acumulados en el impuesto predial y otros conceptos municipales. Este resultado no es menor recordemos que al inicio de la actual administración el municipio de Durango representaba un rezago del 50% en el pago del impuesto predial. Hoy, gracias a estrategias como esta, esta cifra se ha reducido en un 12%, lo que significa no solo una mejora en la recaudación, sino una muestra de la clara confianza ciudadana hacia su gobierno. Los beneficios no se limitan al predial, esta campaña también incluye descuentos en refrendos de licencia de funcionamientos, licencia para ventas de bebidas alcohólicas, multas viales, multas para uso de estacionamientos, infracciones de desarrollo urbano, traslado de dominio, en donde ya se ha reportado un avance del 13% y un 3% de mejora en el pago de multas de habilidad, uno de los rubros de mayor incidencia entre los ciudadanos. Apoyo directo a la economía familiar, más de 141 millones de pesos en subsidios, la política social no se mide únicamente por los discursos, sino por los números. Durante el presente año 2025, la Administración Municipal ha otorgado más de 141 millones de pesos en subsidios y descuentos, lo cual representa un esfuerzo presupuestal importante para apoyar directamente a quienes más lo necesitan. En total se han realizado más de 145 mil transacciones dentro de esta campaña, reflejando una participación masiva por parte de los ciudadanos, quienes han encontrado en esta iniciativa

una oportunidad real para cumplir con sus responsabilidades fiscales, sin comprometer su economía familiar. Este tipo de acciones se alinean a los principios del PAN, gobiernos sensibles que entienden la situación económica de sus habitantes y que responden con soluciones, no con medidas punitivas. Convocamos a los duranguenses a aprovechar este beneficio antes del 27 de agosto. Desde el Grupo Parlamentario del PAN hacemos un llamado respetuoso, pero enfático, a las y los ciudadanos del municipio de Durango, aprovechen esta oportunidad antes del 27 de agosto, fecha en que concluye la campaña “Ven ahorra”. Por último, el trámite es muy sencillo, se puede realizar de forma presencial en los módulos habilitados por el ayuntamiento o bien en línea a través del portal, solo se requiere registrarse con un correo electrónico y contar con una clave Catastra, por su atención, muchas gracias, es cuánto, Presidenta.

Presidenta: Gracias Diputada, pregunto a las y los Diputados, ¿si alguien desea hacer uso de la voz?, no siendo así.

Presidenta: Habiéndose agotado el orden del día y teniendo otro asunto que tratar, siendo las (13:16) trece horas con dieciséis minutos, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos Diputados integrantes de la Séptima Legislatura a periodo extraordinario que dará inicio el día jueves 14 de agosto del presente año a las (12:45) doce horas con cuarenta y cinco minutos. Damos fe-----.

Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza.

Presidenta.

Diputada Delia Leticia Enriquez Arriaga.

Secretaria.

Diputada Verónica González Olguín.

Secretaria.